

La España de Rajoy y Cameron



**PUBLICACIONES DE LA FUNDACIÓN IDEAS
PARA EL PROGRESO**

Informes: son análisis de mayor extensión llevados a cabo por equipos de científicos y expertos en los que la Fundación IDEAS refleja su posición.

Documentos de Trabajo: son análisis más breves llevados a cabo por equipos de científicos y expertos en los que la Fundación IDEAS refleja su posición.

Documentos de Debate: son documentos elaborados por científicos y expertos de la Fundación IDEAS y colaboradores externos que no necesariamente reflejan las posiciones de la Fundación.

Documentos de Análisis Político: son documentos que marcan el posicionamiento político de la Fundación IDEAS en asuntos relevantes de la agenda política.

Artículos de Análisis y Opinión: son artículos de opinión donde el autor libremente expone sus puntos de vista sobre un asunto concreto, sin reflejar las posiciones de la Fundación IDEAS.



Editado por Fundación IDEAS

c/ Gobelás 31, 28023 Madrid

Tel. +34 915 820 091

Fax. +34 915 820 090

www.fundacionideas.es

ISBN: 978-84-15018-63-6

Depósito legal: M-14444-2011

Índice

Resumen ejecutivo	5
1. Introducción	11
2. Las contradicciones de Rajoy ante la crisis 2008-2010.....	13
2.1 Rajoy antikeynesiano.....	14
2.2 Firmas contra el IVA	19
2.3 De vuelta a 1996.....	22
3. La salida de la crisis con un gobierno de derechas <i>à la Cameron</i>	26
3.1 Un ajuste fiscal más duro	26
3.2 Eliminación de prestaciones sociales	29
3.3 Reducción del Estado y “Gran Sociedad”	31
3.4 Encarecimiento de la educación pública	33
3.5 Renacimiento nuclear y abandono de las energías renovables.....	34
3.6 Contra la inmigración, por principio	35
3.7 Privatizar hasta los bosques	38
4. Rajoy 2012: ¿generando confianza?.....	40
Referencias	43

Resumen ejecutivo

El debate político en España se ha centrado desde 2007 de forma casi exclusiva en la crisis económica. Los partidos políticos, los medios de comunicación y los expertos de todos los ámbitos han entrado de lleno en el análisis de las causas de la crisis, y con más o menos éxito, han propuesto diferentes medidas para salir de esta situación.

La persistencia de la crisis económica, derivada del colapso financiero internacional y de un modelo productivo desequilibrado en España, convierte este asunto en el tema central de la disputa política a corto y medio plazo. En este sentido, y con la vista puesta en las elecciones generales de 2012, el Partido Popular no ha dejado de criticar las actuaciones del Gobierno, pero ha dado pocas pistas coherentes sobre sus alternativas ante la crisis.

Por ello, este trabajo intenta responder a dos incógnitas que es preciso despejar antes de que los ciudadanos acudan a las urnas.

- En primer lugar, ¿qué iniciativas diferentes hubiera adoptado un Gobierno de Mariano Rajoy en el periodo 2008-2010 ante la crisis económica? No hay mucha información al respecto, pero sobre la base de las declaraciones públicas de los dirigentes del PP (en prensa y sede parlamentaria) es posible reconstruir al menos de forma parcial esa respuesta.
- En segundo lugar, es preciso responder también a este interrogante: ¿cuál es el modelo diferente que el PP propone como alternativa al Gobierno socialista, y qué políticas económicas se derivarían de ese modelo si llegara a gobernar?

Para responder a estas preguntas utilizamos evidencia programática del PP, y dada la escasa información disponible al respecto, hemos considerado de interés extrapolar el efecto que tendrían en España políticas similares a las desarrolladas por el Primer Ministro británico, David Cameron, al que Rajoy ha decidido tomar como referencia, según sus declaraciones públicas.

Los resultados de este ejercicio son los siguientes. En relación con la primera pregunta, toda la evidencia recopilada en este documento demuestra que **mientras el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, adaptaba sus políticas económicas a las distintas fases de la crisis, Rajoy adaptaba sus contrapropuestas a las distintas medidas del Gobierno**, incluso aunque eso pudiera suponer contradecirse a sí mismo o ir en contra del consenso internacional en materia económica. En concreto, podemos distinguir tres fases:

- Durante la primera fase de la crisis (*la fase del declive y el rescate*), el Gobierno siguió las recomendaciones de todos los organismos internacionales y aplicó políticas keynesianas de aumento del gasto público e impulso de la demanda agregada. Entonces Rajoy se opuso al Plan E, al Fondo Estatal para la Economía Sostenible y solicitó insistentemente un recorte drástico adicional del gasto público de hasta 10.000 millones de euros. Si se hubieran aplicado las recomendaciones antikeynesianas de Rajoy en la primera fase de la crisis, el paro habría afectado antes a 910.000 personas más; el PIB habría decrecido 1,3 décimas adicionales; y el sufrimiento social habría sido mayor.
- En la segunda fase de la crisis (*la fase del estancamiento y la consolidación*), las recomendaciones de todos los expertos, una vez se superó la caída del PIB, se centraron en pedir a los gobiernos de las economías avanzadas una reducción de los déficits fiscales acumulados durante la primera etapa. Para ello, era necesario racionalizar el gasto público, algo que el Gobierno socialista concretó con la no revalorización transitoria de una parte de las pensiones (excepto las mínimas) y la rebaja de sueldo de los funcionarios, además de la reducción de obras de infraestructuras. Rajoy sorprendió entonces con su oposición a un recorte que había venido defendiendo y en medio de la mayor crisis de la deuda soberana en Europa el PP votó en contra de aquellas medidas, poniendo en grave riesgo la solvencia de España en los mercados internacionales. Además de actuar por la vía del gasto, para reducir el déficit también era necesario incrementar los ingresos fiscales, algo que hicieron todos los países (incluido el Reino Unido de Cameron) y a lo que Rajoy también se opuso. Lo más sorprendente es que lideró una insólita campaña de “rebelión contra la subida del IVA”. De haber triunfado la incongruente estrategia fiscal de Rajoy (oponiéndose a las congelaciones de gasto y al aumento de ingresos), los ingresos públicos habrían caído en 12.000 millones de euros, los gastos habrían aumentado en 8.000 millones y el aumento del déficit habría sido de 2 puntos adicionales del PIB.
- Finalmente, cuando la crisis afrontó su tercera fase (*la fase de las reformas y la recuperación*), Rajoy volvió a oponerse a la estrategia de economía sostenible del Gobierno para cambiar el modelo productivo. Como alternativa propuso volver al modelo económico de 1996, reintroduciendo otra vez la

deducción por compra de vivienda, que estaba en el origen de la burbuja inmobiliaria que tan profunda ha hecho la crisis en España.

- **Es decir, durante la crisis, Rajoy mostró un perfil errático, ideologizado y carente de sentido económico.** Cuando había que gastar para rescatar la economía, Rajoy proponía apostar por el “mercado libre y el déficit cero”. Cuando era necesario reducir el déficit a través de un programa ambicioso y socialmente equilibrado, Rajoy se oponía a la congelación de las pensiones, proponía recortes plenamente estéticos y abogaba por reducir los ingresos públicos, oponiéndose a la subida del IVA y pidiendo bajadas en otros impuestos. Y cuando el Gobierno planteó una estrategia de economía sostenible para transformar el modelo productivo y comenzó a aprobar reformas, Rajoy giró de nuevo la vista al modelo económico de 1996, con todos los desequilibrios estructurales que nos han llevado a la situación actual: sobredimensionamiento del sector de la construcción, escaso aumento de la productividad y fuerte endeudamiento con el exterior.

Si las respuestas de Rajoy a la crisis se basan en situarse siempre contra el Gobierno, incluso a costa de caer en contradicciones económicas importantes, el análisis sobre el modelo alternativo que propone no parece generar la confianza que reclama en público. Hay en realidad pocos elementos claros en las ideas que Rajoy propone para el futuro, aunque sí ha declarado que aplicará las políticas del Primer Ministro Cameron si llega a la Moncloa. En el caso de que Rajoy llegara a gobernar y decidiera importar las recetas del dirigente británico en España, su política se ajustaría a las siguientes líneas:

- **El ajuste fiscal sería más duro:** frente a la estrategia de consolidación fiscal aplicada por el Gobierno del presidente Zapatero, de carácter gradual (con un tamaño de 27.000 millones de euros) y de tipo mixto (el 40% basada en recorte de gastos y el 60% en aumento de ingresos), un Gobierno de Rajoy inspirado por la estrategia de Cameron sería mucho más agresivo. Trasladar el ajuste fiscal de Cameron a España implicaría doblar el recorte (equivalente a 60.000 millones de euros) y concentrarlo en la reducción del Estado de bienestar (el 80% de recorte de gastos; el 20% de incremento de ingresos).
- **Eliminación de prestaciones sociales:** para lograr un recorte del gasto tan drástico como el anunciado por Cameron (y aplaudido por Rajoy), el recorte de Cameron en prestaciones sociales (22.000 millones de euros) podría traducirse en recortes similares por valor de 13.000 millones de euros. Las partidas que más peligro correrían serían las ayudas familiares por hijo, la renta de inserción para los parados de larga duración, las becas para estudiantes, la renta de emancipación y, desde luego, las ayudas a la dependencia (que ya están siendo bloqueadas en las comunidades gobernadas por el PP, como Madrid y Valencia).

- **Reducción del Estado y “Gran Sociedad”:** como parte del programa de recortes diseñado por Cameron al llegar al Gobierno, anunció el despido de 500.000 funcionarios. Lo vinculó a la necesidad de ahorrar costes, pero también al proyecto de “Gran Sociedad”, según el cual algunos servicios públicos podían prestarse por los ciudadanos. El PP ya ha incluido este concepto en su programa electoral para las elecciones de mayo de 2011 (bajo el título “Mejor Sociedad”). Si Rajoy aplicara un recorte equivalente en España, ello implicaría despedir a 250.000 empleados públicos (incluyendo profesores, médicos, policías, etc.).
- **Encarecimiento de la educación:** las medidas más controvertidas del programa de Cameron para Reino Unido han sido las relativas al aumento de costes de la educación universitaria. Si Rajoy desarrollara esas mismas medidas en España, el coste de las matrículas universitarias podría aumentar un 245%, de tal forma que completar los estudios de grado llegaría a costar 12.000 euros por alumno en las universidades públicas.
- **Renacimiento nuclear y abandono de las energías renovables:** un ámbito en el que el PP ha estado aún más activo que los conservadores británicos ha sido en el energético. Al igual que Cameron, Rajoy ha defendido un renacimiento de la opción nuclear, algo que en España implica necesariamente un retroceso de las energías renovables, dado el exceso de capacidad instalada. De hecho, la FAES ha llegado a proponer aumentar la vida útil de las centrales hasta 60 años y buscar nuevos emplazamientos para nuevas centrales, algo que podría costar hasta 15.000 millones de euros en la primera fase del renacimiento nuclear.
- **Contra la inmigración, por principio:** otro de los elementos que han caracterizado el primer paquete de medidas del Gobierno de Cameron ha sido el cambio en la política de inmigración. El Primer Ministro británico ha llegado a culpar a los inmigrantes de la crisis y ha limitado la entrada de trabajadores extranjeros a 100.000 por año. Las universidades y las empresas, que necesitan esos trabajadores inmigrantes, ya han protestado públicamente porque hay tareas de su actividad productiva que no se podrán cubrir. Rajoy también ha desarrollado su particular versión del discurso conservador que planea por Europa. Ha llegado a plantear cuotas a priori y ha propuesto un “contrato de integración”, en lugar de vincular la política migratoria a los contratos laborales y a las necesidades de las empresas, como indica la racionalidad económica y plantea el marco actual vigente. La traslación del programa inmigratorio de Cameron a España no solo tendría consecuencias sociales, sino también económicas, de magnitud, porque España tiene necesidades demográficas y la recuperación de la crisis pasará por volver a incorporar trabajadores extranjeros. Plantear una reducción de la entrada

de inmigrantes al 50% del flujo promedio de los últimos 4 años, implicaría una reducción potencial del PIB español del 0,3%.

- **Privatizar hasta los bosques:** finalmente, en su intento de maximizar el número de bienes públicos que se convierten en privados, Cameron llegó a plantear la privatización de los bosques británicos, con el objetivo de recaudar 280 millones de euros. Si Rajoy aplicara una medida similar en España, el 25% de la superficie forestal de nuestro país podría pasar a manos privadas.

En definitiva, este documento llega a la conclusión de que según la evidencia disponible, y a pesar de la indefinición que trata de mantener Mariano Rajoy sobre su programa de futuro, no hay elementos para confiar en el PP, como reclama en su propaganda electoral. Probablemente una España gobernada por Rajoy volvería al modelo económico especulativo y de bajo valor añadido que caracterizó la etapa de 8 años de gobierno del PP, y que alentó los desequilibrios estructurales que en buena parte son la causa de la situación actual que estamos atravesando. Se trata de algo que el propio Rajoy ha anunciado varias veces. Asimismo, el modelo social de Rajoy sería más insolidario que el actual porque debilitaría el Estado de bienestar (Cristóbal Montoro ha llegado incluso a plantear la privatización de la educación y la sanidad); y también sería excluyente (pues en su momento anunció que daría marcha atrás a importantes leyes sociales como la del matrimonio homosexual, la de igualdad de género o la del aborto). Y, desde luego, sería un modelo medioambientalmente insostenible, con una reducción de las energías limpias y un debilitamiento de los compromisos que tiene España en materia de lucha contra el cambio climático.

1

Introducción

La principal preocupación de los ciudadanos españoles es actualmente la crisis económica. Existe una gran incertidumbre sobre cuándo volverá la economía española a crecer y a crear empleo suficiente, y hay muchas personas que están sufriendo con dureza los efectos de la crisis. Muchos de estos ciudadanos pueden atribuir la situación actual a las políticas aplicadas por el Gobierno, y pueden pensar que se podían haber tomado medidas diferentes para mejorarla (como diariamente se encargan de repetir los medios de comunicación afines a la derecha).

Sin embargo, a pesar de los mensajes repetitivos de que las políticas no son correctas y que el PP gestionaría mejor la economía, Mariano Rajoy no ha desvelado cuál sería su agenda de reformas si llegara a gobernar, y únicamente se ha limitado durante los dos últimos años desde que se inició la crisis a criticar al Gobierno, sin ofrecer una alternativa clara de política económica y social.

En este documento intentamos identificar, a través de sus declaraciones y su posicionamiento en los debates parlamentarios, cuál sería la política económica y social de un Gobierno del PP. Las dos incógnitas que trataremos de despejar son las siguientes:

- En primer lugar, ¿qué iniciativas diferentes hubiera adoptado un Gobierno de Mariano Rajoy en el periodo 2008-2010 ante la crisis económica?
- En segundo lugar, y esto es lo más importante, ¿cuál es el modelo diferente que el PP propone como alternativa al Gobierno socialista, y qué políticas económicas se derivarían de ese modelo si llegara a gobernar?

Las contradicciones en las que ha caído el PP en su tarea de oposición económica al Gobierno durante estos dos años de crisis económica global y su imprecisión programática nos obligan a tener que extrapolar sus ideas a partir de las políticas que están desarrollando otros líderes conservadores europeos que sí están en el Gobierno. En particular, nos hemos centrado en el caso del Primer Ministro británico, David Cameron, por quien Rajoy ha expresado públicamente su admiración.

Cameron accedió al Gobierno siguiendo una estrategia de indefinición programática similar a la que viene desplegando Rajoy, y obtuvo la victoria dejando que la crisis desgastara al Gobierno laborista británico. Sin embargo, en cuanto llegó al Gobierno emprendió un drástico plan de recortes sociales que ha llegado incluso a paralizar la incipiente recuperación económica que apuntaba aquel país.

Este documento se divide en tres partes. En la primera sección hacemos un análisis basado en las respuestas contradictorias que Rajoy ha venido articulando desde el principio de la crisis, y que se ponen en evidencia a través de sus declaraciones públicas y sus decisiones de voto en el Parlamento. Mientras que el presidente del Gobierno adaptaba sus políticas a las distintas fases de la recesión, Rajoy se ha limitado a adaptar sus réplicas a lo que hiciera el presidente del Gobierno, incluso aunque ello careciera de sentido económico o implicara contradecirse a sí mismo.

En la segunda sección realizamos un repaso de las políticas aplicadas por David Cameron en Reino Unido, y se realizan algunos cálculos de qué significarían estas políticas para España si Rajoy llegara en algún momento al Gobierno y, al igual que ha hecho Cameron, destapara un programa de Gobierno de derechas que no fue anunciado en ningún momento durante su campaña electoral. La comparación con Reino Unido tiene sentido porque aquel país partía de una crisis similar a la española (pinchazo de la burbuja inmobiliaria, problemas en el sector financiero y déficit público superior al 10%). Además, ha pasado de un Gobierno progresista a uno conservador, lo que ha permitido la diferencia de modelos socioeconómicos y de estrategias ante la crisis. Y sobre todo, tiene sentido porque Rajoy ha declarado públicamente que si llegara a la Moncloa aplicaría un programa similar al de Cameron.

El documento concluye con una última sección en el que se trata de resumir cuál es en realidad el modelo que aplicaría un Gobierno de Rajoy en España. Nuestra principal conclusión es que una España gobernada por Rajoy volvería al modelo económico especulativo y de bajo valor añadido que caracterizó la etapa de 8 años de Gobierno del PP, y que alentó los desequilibrios estructurales que en buena parte son la causa de la situación actual que estamos atravesando. Se trata de algo que el propio Rajoy ha anunciado varias veces. Asimismo, el modelo social de Rajoy sería insolidario (porque debilitaría el Estado de bienestar, incluso Cristóbal Montoro ha hablado de privatizar la educación y la sanidad); y también sería excluyente (dando marcha atrás a importantes leyes sociales como la del matrimonio homosexual, la de igualdad de género o la del aborto). Y, desde luego, sería un modelo medioambientalmente insostenible, con una reducción de las energías limpias y un debilitamiento de los compromisos que tiene España en materia de lucha contra el cambio climático.

2

Las contradicciones de Rajoy ante la crisis 2008-2010

“Para salir de la crisis, Zapatero vuelve a las viejas y fracasadas ideas de subir los impuestos”
Mariano Rajoy. *El Mundo*, junio de 2009

La política económica del presidente del Gobierno, ante la mayor crisis económica mundial desde la Gran Depresión de los años treinta, ha sido ir dando respuestas a los problemas sucesivos que han ido surgiendo desde el estallido de la crisis y la paralización del sistema financiero mundial. Ésta ha sido una crisis con múltiples dimensiones, que se han ido sucediendo una tras otra de forma encadenada, y el Gobierno ha ido adoptando medidas para tratar de resolver los problemas y minimizar los impactos sobre la economía y la sociedad española.

Retrospectivamente se pueden distinguir tres fases en la crisis económica:

- a) **Fase de fuerte caída de la actividad económica** (2008 y 2009): contagio de la crisis financiera internacional, desplome del PIB y rápido incremento del desempleo. El Gobierno aplica políticas de estímulo a través de un aumento del gasto público.
- b) **Fase de estancamiento económico** (finales de 2009 y 2010): crecimiento nulo, aumento del déficit y problemas en los mercados de deuda soberana. El Gobierno pone en marcha planes de austeridad presupuestaria e inicia las reformas económicas.
- c) **Fase de leve inicio de la recuperación** (finales de 2010 hasta el presente): cifras de crecimiento del PIB ligeramente positivas y desaceleración de las tasas de crecimiento del desempleo. El Gobierno desarrolla las reformas aprobadas y pone en marcha la Ley de Economía Sostenible para avanzar en el cambio de modelo productivo.

Cada fase requería una respuesta correspondiente en cuanto al diseño de la política económica y, por consiguiente, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reaccionó cada vez con instrumentos diferentes exigidos por los retos en cada momento. Las iniciativas del Gobierno estuvieron siempre en línea con los acuerdos para hacer frente a la crisis a los que se llegó en el marco del G-20 (cumbres de Washington en 2008, Londres y Pittsburgh en 2009) y en la Unión Europea. Por ello, puede afirmarse sin lugar a dudas que las actuaciones siempre fueron coherentes con lo que se estaba haciendo en los países más desarrollados.

Las pocas propuestas articuladas por el PP, en cambio, se limitaban a medidas muy puntuales con poco impacto y en muchos casos se reducían a una plena oposición/negación a las medidas del Gobierno. Analizando esta dinámica con más detalle, vemos que mientras que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estaba respondiendo a la crisis, Rajoy solo estaba respondiendo al presidente del Gobierno sin visión del futuro y con contradicciones obvias.

Resulta bastante irónico que sea precisamente Rajoy quien hable de improvisación al valorar las medidas del Gobierno. Así, ante el plan de ajuste presentado al Parlamento en mayo de 2010, Rajoy argumentaba que el Presidente del Gobierno pretendía implementar “un paquete de medidas sin pensarlas, improvisadas” (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 162).

Esta actitud del Partido Popular, consistente en responder a la crisis solo oponiéndose a lo que estaba haciendo el Gobierno, se puede observar claramente en cada una de las tres fases que hemos identificado anteriormente en la crisis actual. El PP no aporta soluciones que correspondan a los problemas que ha atravesado España en cada momento, su única estrategia es mantener que hacer lo contrario a lo que se está haciendo es lo correcto. En los tres apartados siguientes mostramos cuáles han sido las contradicciones de Rajoy a lo largo de las tres fases de la crisis.

2.1 Rajoy antikeynesiano

Durante la primera fase de la crisis, ante la aplicación de políticas fiscales expansivas, Rajoy se posicionó en materia económica con un firme antikeynesianismo, reflejado en la repetida exigencia de medidas de austeridad y de bajada de impuestos.

A pesar de que los organismos internacionales recomendaban que, dada la gravedad de la crisis financiera y la caída del consumo privado provocada por las expectativas negativas, el sector público acudiera al rescate del sistema financiero y apoyara la actividad económica con estímulos fiscales, la política económica que planteaba el PP para España suponía ir en dirección contraria.

Cuando la crisis financiera se transformó en una crisis económica en términos reales, ralentizando la actividad económica y destruyendo empleo, todos los países europeos comenzaron a adoptar en 2008 y 2009 planes de choque basados en políticas fiscales expansivas orientadas hacia la reactivación económica, para sostener la producción y el empleo. Estos esfuerzos formaron parte de una estrategia globalmente coordinada en el marco de las cumbres del G-20, y también en la Unión Europea.

Esta estrategia trató, por un lado, de aumentar el control sobre los mercados financieros a través de una mayor cooperación, una regulación reforzada y reformas de las instituciones financieras internacionales. Por otro lado, se acordó estimular la economía mundial mediante medidas fiscales que animasen la demanda doméstica (G-20, 2008), y con la inyección de 1,1 billones de dólares en la economía mundial (G-20, 2009).

A nivel europeo se implementaron estos compromisos fijando un impulso del 1,5% del PIB europeo como respuesta macroeconómica anticíclica (Comisión Europea, 2008) para mantener el empleo y sostener las actividades empresariales. España realizó en 2009 el estímulo fiscal más elevado de la Unión Europea, cercano al 2,3% del PIB, que en términos relativos solo fue superado por Estados Unidos entre las grandes economías mundiales. La razón de este mayor estímulo fiscal obedeció a que tanto Estados Unidos como España, Reino Unido e Irlanda afrontaron dificultades mayores que el resto de economías avanzadas, debido a la fuerte burbuja inmobiliaria que habían acumulado en los años de bonanza.

El Gobierno español puso en marcha medidas de aumento del gasto público, incluyendo las inversiones realizadas en el ámbito municipal a través del Plan E. Los objetivos principales fueron dar apoyo a las familias y a las empresas, el fomento del empleo y dar apoyo al sistema financiero. Se movilaron más de 13.000 millones de euros (8.000 millones a través del Fondo Estatal de Inversión Local [FEIL] y 5.000 a través del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local [FEESL] con deducciones fiscales, ayudas directas, bonificaciones, facilitación del acceso al crédito y fondos públicos, sobre todo a actividades que a medio y largo plazo contribuyen a la modernización de la economía).

Un apoyo especial experimentaron el sector de la automoción, actividades de la innovación empresarial y actuaciones medioambientales, así como el sector financiero para el cual se creó, en primer lugar, un instrumento para garantizar la liquidez ante la situación de los mercados internacionales (Fondo de Adquisición de Activos Financieros, 2008) y, posteriormente, el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) para facilitar el proceso de ajuste del sector.

Otra vertiente de la respuesta a los retos de la primera fase eran estímulos para el fomento del empleo y medidas para aumentar el poder adquisitivo de los ciudadanos. Así se puso en marcha un Plan Extraordinario de Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral, ayudas de 350 euros mensuales para el proceso de búsqueda de trabajo, ayudas a la movilidad geográfica, una bonificación de 1.500 euros para la contratación de desempleados con cargas familiares y la elevación al 60% de la capitalización de las prestaciones por desempleo para fomentar el empleo autónomo.

Entre las medidas que se dirigían a aumentar el poder adquisitivo de las familias, destacan la deducción de 400 euros en el IRPF o las medidas para reducir la carga de las familias por la compra de una vivienda. Con este objetivo se alargó sin coste adicional los plazos de la hipoteca, se aplazaron temporalmente las cuotas de la hipoteca y se adelantó la deducción fiscal por vivienda.

Los efectos económicos de todo este conjunto de medidas fueron indudablemente una ayuda para sostener parcialmente la actividad económica y evitar una mayor caída de empleo. La profundidad de la recesión económica mostró, a posteriori, la dificultad de frenar con estas medidas la caída global de la actividad y el incremento del desempleo. Sin embargo, de no haberse puesto en marcha esta respuesta, la situación hubiera sido mucho más grave.

La actitud del PP y de su líder, Mariano Rajoy, en toda esta primera fase durante 2008 y 2009 estuvo caracterizada por una irresponsable falta de voluntad a incorporarse a un esfuerzo conjunto europeo para suavizar los impactos de la crisis internacional. Se opuso a la expansión coordinada del gasto público recomendada a nivel internacional, pidiendo medidas procíclicas de austeridad y de reducción de impuestos¹, que si se hubieran aplicado habrían ahondado la caída del PIB y la pérdida de empleos durante esa primera fase de la crisis.

Rajoy no solo se opuso al Plan E, sino que además pidió durante el debate presupuestario de 2008 un recorte adicional del gasto público de 10.000 millones de euros (PP, 2009). Si se hubieran aplicado las recetas de Rajoy, la caída del PIB entre 2008 y 2009 habría sido 1,4 puntos mayor, y la pérdida prematura de empleos habría sido de 910.000².

- 1 “Los países que necesitan financiación del resto del mundo, como especialmente lo es España, han de corregir su déficit exterior mediante un especial esfuerzo de austeridad de sus cuentas públicas.” Posición del partido popular sobre la cumbre de Washington del 15 de noviembre de 2008 (PP, 2008b).
- 2 De acuerdo con las estimaciones oficiales (Informe Económico del Presidente-2010), el conjunto de medidas ligadas al Plan E y al FEES permitió mantener la actividad a más de 25.000 empresas, y consiguió generar o mantener al menos 700.000 empleos, sobre todo en sectores ligados a la construcción. Al mismo tiempo, evitó que el PIB cayera un 0,8% adicional en 2008.

Al principio, el PP se limitó a criticar las medidas del Gobierno, como lo hacía Cristóbal Montoro, por ejemplo con el fin de la deducción en el IRPF de 400 euros³, o cuando Rajoy consideraba que el Plan E no era más que un programa para “hacer más aceras” (*El Imparcial*, 24.10.2008). Pero poco a poco las afirmaciones del PP empezaron a confirmar el origen ideológico de su discurso, desvinculado de toda lógica económica y de la coyuntura por la que pasaba España. La obsesión del PP por bajar los impuestos quedó reflejada en formulaciones explícitas como la siguiente:

“Esta austeridad nos lleva a otro de los elementos esenciales para afrontar la crisis: las bajadas de impuestos. En las actuales circunstancias, la mejor medida de política económica que podemos llevar a cabo es rebajar los impuestos con un doble objetivo: aumentar la eficiencia de nuestro sistema económico, y sostener los recursos de los sectores más afectados.” (PP, 2008a).

A priori, el razonamiento puede parecer lógico. No en vano, los estímulos keynesianos para sostener la Demanda Agregada de la economía pueden hacerse incrementando gastos (como decidió el Gobierno) o recortando impuestos (como defendió Rajoy). Pero eso solo es así en circunstancias normales. Cuando el sector privado se retira de la actividad económica porque no tiene acceso al crédito (y no por exceso de presión fiscal), como ocurrió en España por el contagio de la crisis financiera internacional, la bajada de impuestos que proponía Rajoy no habría tenido efecto sustancial y solo habría logrado debilitar la capacidad del sector público de sostener la actividad económica que el sector privado había dejado de realizar en nuestro país. En aquel momento, el debate entre Gobierno y oposición podría haberse centrado en torno a las diferentes partidas de gasto público que debían incrementarse. De hecho, ese fue el debate que se produjo en otros países europeos, pero el PP decidió limitarse a repetir su mantra de menores impuestos y, sobre todo, recortes en el gasto público. Nunca explicaron por qué contradecían una expansión de gasto que era lógica en términos económicos y que recomendaban todos los economistas y organismos internacionales, sino que prefirieron acomodarse en un discurso ideológicamente fuerte y fácil de percibir por los ciudadanos, incluso aunque denotara incompetencia en materia económica.

Rajoy se opuso a ello. Un recorte del gasto adicional de 10.000 millones de euros —suponiendo un efecto multiplicador negativo similar, pero aplicado al sector de las administraciones públicas— habría implicado una caída adicional del PIB del 0,6 en 2009 y una pérdida adicional de 210.000 empleos. En total, la estrategia antikeynesiana de Rajoy ante la crisis habría supuesto una caída adicional del PIB del 1,4 y la pérdida prematura de 910.000 empleos.

3 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Pleno 28, 2008.

En todo caso, sus propuestas de recorte nunca fueron muy profundas para no asustar a la opinión pública, y por eso acompañaron habitualmente su fuerte retórica con solicitudes de recortes banales (que como mucho habrían logrado recortar 800 millones de euros). A modo de ejemplo:

- *“Reducir a la mitad el número de asesores del Gobierno y suprimir ministerios que no sirven para nada, como la Vicepresidencia Tercera, el Ministerio de Igualdad o el de Vivienda”* (PP, 18.10.2009).
- *“Habría que fusionar el Ministerio de Educación con el de Cultura, y el de Trabajo con el de Sanidad, y además eliminar todas las subvenciones que no están debidamente justificadas”* (El País, 12.05.2010).
- *“Reduciremos el número de consejerías, con un número máximo de diez por cada comunidad y ciudad autónoma. Reduciremos el número de delegaciones territoriales (...). Reduciremos el número de entes y organismos del sector público...”* (PP, programa electoral municipal, 2011).

Más allá de si esos recortes administrativos eran necesarios o no, lo que el PP no llegó nunca a explicar en sus propuestas de reducción del gasto público durante la **primera fase de la crisis es en qué medida un recorte de gasto público habría ayudado al país a amortiguar el primer embate de la crisis.**

La mayor de las contradicciones en materia económica se produjo cuando el PP propuso recuperar la Ley de “déficit presupuestario cero” (PP, 2010) que obligaba a las administraciones a cumplir un techo presupuestario fijo y que convierte al presupuesto público en un amplificador procíclico de las crisis. La caída de ingresos que se produce en el presupuesto público al frenarse la actividad económica obliga al Estado a gastar menos, si tiene obligación de mantener un equilibrio anual por Ley, lo cual supone una mayor reducción de la demanda agregada y un empeoramiento de la recesión.

Las visiones más modernas del diseño presupuestario, y de su necesario equilibrio a medio plazo, persiguen una estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo económico, como establece la norma que introdujo el Gobierno socialista, para garantizar que se generan ahorros en periodos de bonanza con los que financiar el déficit necesario cuando el sector público tiene que apoyar a la economía en periodos de recesión.

Pero no se quedaron ahí. El PP solo recomendó durante toda la fase de caída de la economía una medida de estímulo fiscal, y fue precisamente la que menos podría interesar en la economía española: Rajoy planteó incrementar la deducción por la

compra de vivienda⁴, en una situación en la que ya todo el mundo reconocía los problemas que provocó la burbuja inmobiliaria.

2.2 Firmas contra el IVA

El deterioro de las cuentas públicas que experimentaron gran parte de los países europeos como consecuencia de las políticas de gasto durante la fase de rescate, unidas a un fuerte descenso de los ingresos impositivos, desencadenó otra nueva fase de la crisis: las turbulencias en los mercados de deuda soberana en la zona euro. En esta fase, España ha sido uno de los países afectados por la inestabilidad de los mercados, a pesar de que sus datos macroeconómicos (nivel de déficit y endeudamiento público) no justificaban la consideración de riesgo que llegaron a alcanzar los títulos de deuda española a lo largo de 2010.

Las respuestas del Gobierno a los retos en esta segunda fase que sobre todo se desarrolló durante el año 2010 tenían dos ejes principales, la austeridad y la cohesión social. De nuevo el Gobierno español actuó dentro del marco de los acuerdos internacionales, especialmente los objetivos acordados entre los países de la Unión Europea. El Gobierno se comprometió a reducir el déficit público en 2010 hasta el 9,3% del PIB y a llegar a un 3% en 2013. Con este objetivo aprobó entre diciembre de 2009 y mayo de 2010 un ahorro de 27.000 millones de euros y un ligero aumento de impuestos para los años 2010 y 2011.

El Plan de austeridad y consolidación fiscal se planteó ya en un contexto en que la economía estaba en fase de estancamiento y apuntando algunos signos de reactivación. Algunos economistas habrían recomendado que se retrasara el ajuste fiscal para no ralentizar la recuperación incipiente, pero la mayoría estaba de acuerdo en que en medio de la crisis de deuda de la eurozona lo mejor era actuar de forma decisiva para reducir el déficit y no incrementar la incertidumbre económica.

Por ello, en 2010 el Gobierno decidió cambiar la política de estímulos de la primera fase de la crisis y poner en marcha el siguiente paquete de medidas de consolidación fiscal: retirada de la deducción de 400 euros del IRPF y del llamado “cheque bebé” y aplicación de una reducción media de un 5% a los salarios de los funcionarios. Además, aplicó medidas para aumentar los ingresos a través de una lucha más eficiente contra el fraude fiscal o la subida del IVA del 16% al 18%, anunciada con meses de antelación. Para evitar futuras burbujas inmobiliarias abolió la deducción a la compra de vivienda, y trató de que el ajuste se realizara con un criterio de progresividad social, subiendo el impuesto a las rentas de capital y el IRPF para las rentas más altas.

4 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Pleno 12, 2008.

La razón por la que el Gobierno actuó no solo por el lado de los gastos, sino también por el lado del aumento de los ingresos fiscales, fue porque era ahí donde la crisis había impactado con más fuerza en las finanzas públicas. Como se puede observar en la Tabla 1, desde el inicio de la crisis los ingresos públicos anuales han caído en aproximadamente 40.000 millones de euros con respecto al nivel anterior a la crisis, es decir, aproximadamente un 4% del PIB.

Por eso, la estrategia de consolidación fiscal de carácter mixto (congelación de gastos y aumento de ingresos) aplicada por el Gobierno era la más correcta desde el punto de vista económico, y también la más equilibrada desde el punto de vista social. El apoyo de la Comisión Europea fue explícito a este plan de austeridad fiscal de doble vía, pero el PP de Rajoy volvió a desmarcarse de toda lógica económica y organizó su respuesta a esta segunda fase de la crisis con el único objetivo de oponerse al Gobierno, sin mayor justificación económica que aportase argumentos para sostener esa postura.

De hecho, en ese contexto, lo lógico habría sido que Rajoy se hubiera encontrado cómodo con el plan de austeridad que el Gobierno llevó al Parlamento en mayo de 2010, pero decidió oponerse y votar en contra. Se opuso incluso a pesar del riesgo que suponía para la situación de España en los mercados internacionales (hay que recordar que el Plan de ajuste se aprobó por un solo voto de diferencia, cuando todos los analistas esperaban un apoyo del PP, basado en la razón de Estado). Rajoy, sin embargo, prefirió la deriva populista y se opuso a la congelación de salarios públicos, obviando incluso que él formaba parte del Gobierno popular que también la aplicó en 1997. Y se opuso también a las medidas para incrementar

Tabla 1. Ingresos impositivos y evolución temporal

	2008	2009	2010
IRPF	72.573	65.734	67.601
Variación anual	-0,1%	-7,9%	+5,9%
Impuesto de Sociedades	35.445	22.300	14.648
Variación anual	-20,9%	-18,3%	-27,4%
IVA	50.884	29.281	45.625
Variación anual	-8,9%	-39%	+35,9%
Impuestos especiales	19.812	20.450	20.352
Variación anual	0,1%	+4,5%	
TOTAL INGRESOS IMPOSITIVOS	185.422	143.783	154.751
Variación anual	-7,2%	-16,7%	+8,1%

Fuente: Presupuestos Generales del Estado

los ingresos fiscales. De nuevo, cuando la UE en su conjunto adopta políticas de ajuste y las recomendaciones de los economistas iban en la dirección de recuperar los ingresos públicos, Rajoy propuso lo contrario para oponerse al presidente del Gobierno. Dijo:

“Hay que bajar los impuestos, dejar los recursos en manos de los contribuyentes; la apuesta es decir a las pymes y a los autónomos que te bajaremos los impuestos, que aguantes, y que si puedes, inviertas. Es la única política seria en estos momentos”. (El País, 24.04.2009).

El PP de Rajoy llegó a hacer de esta cuestión una bandera de confrontación política activa, que cristalizó en una insólita campaña de recogida de firmas para evitar la subida del IVA⁵. El resultado en términos de apoyo ciudadano fue escaso, pero sí demostró la capacidad del PP de vincular sus políticas a posiciones demagógicas y evitar un debate serio sobre qué alternativas tenía España para reducir el déficit de forma drástica.

En aquel momento, estaba claro que las propuestas de Rajoy para reducir el déficit público (recorte del número de altos cargos, eliminar ministerios o gastos de representación) eran insuficientes como para evitar la subida del IVA, ya que apenas habrían recortado el déficit de forma marginal (un 0,08%). El PP no justificó en ningún momento la lógica de su propuesta de tímida reducción de gasto y pérdida de ingresos fiscales por la bajada de impuestos, que no hubiera resuelto el problema del déficit, sino que lo hubiera agravado.

Lo sorprendente es que si el Gobierno hubiese aplicado efectivamente la propuesta de Rajoy de rebajar los impuestos en lugar de subirlos, las consecuencias para la economía española podrían haber sido dramáticas. Suponiendo un escenario de una reducción del 1% del IVA, del 5% en el Impuesto de Sociedades, y del 5% en el IRPF, la caída de ingresos en el año 2009 podría haber alcanzado alrededor de 12.000 millones de euros más de lo que ya disminuyó la recaudación efectiva. Si a esto añadimos la oposición de Rajoy al paquete de austeridad que aprobó el Gobierno el pasado mes de mayo (que incluía la congelación de las pensiones y la reducción de los salarios públicos), el gasto habría aumentado al menos en otros 8.000 millones euros. Esta estrategia fiscal incongruente planteada por el PP habría implicado, por tanto, un agujero adicional en las finanzas públicas de 20.000 millones de euros, lo que hubiera supuesto añadir 2 puntos al déficit público de la economía española.

5 En abril de 2010 Esperanza Aguirre lanzó en el municipio madrileño de Leganés con el apoyo de Mariano Rajoy una campaña llamada “rebelión cívica” de firmas contra la subida del IVA y repartían folletos en los que acusaron al Gobierno de utilizar el dinero recaudado para otros objetivos distintos a los previstos (*El Economista*, 18.04.2010).

Y, sobre todo, habría impedido financiar algunas medidas que el Gobierno socialista consideró imprescindibles para garantizar una salida cohesionada a la crisis. Estas medidas se concretaron en nuevas ayudas de 426 euros complementarias al subsidio de desempleo para personas que agotaban las prestaciones, y también se articuló a través del mantenimiento de las partidas de gasto social más emblemáticas (educación, sanidad, desempleo, pensiones y dependencia). Políticas que con la bajada de impuestos que Rajoy propuso a destiempo nunca se hubieran podido financiar, sin haber elevado el déficit hasta límites incompatibles con la situación de los mercados de deuda en Europa.

2.3 De vuelta a 1996

Finalmente, la crisis entró en una tercera fase, en la que ahora nos encontramos y en la que las posiciones del Gobierno y la oposición vuelven a divergir. Esta tercera fase comienza en el segundo semestre de 2010 y se caracteriza por un obvio cambio de tendencia en los datos de crecimiento y empleo que ya apuntan a una lenta recuperación económica. Las medidas adoptadas por el Gobierno en las fases anteriores ya comienzan a tener impactos positivos y, por eso, el mayor esfuerzo ahora se concentra en reformas sectoriales que deben formar la base para un verdadero cambio del modelo productivo.

El núcleo crucial de esta estrategia del Gobierno es la Ley de Economía Sostenible (LES), recientemente aprobada, que pretende crear las nuevas bases sobre las que debe apoyarse el modelo de crecimiento español para las próximas décadas. Uno de los objetivos de la LES es estimular los sectores de la economía del futuro como la biotecnología, la agroalimentación, las tecnologías sanitarias y farmacéuticas, las TIC y los contenidos digitales, la química, los sectores relacionados con la protección medioambiental, incluyendo las energías renovables y la eficiencia energética, el sector aeroespacial⁶.

Sin embargo, la respuesta del PP a esta nueva fase ha sido de nuevo la de oponerse al presidente del Gobierno, independientemente de la evolución que tenga el ciclo económico. El PP ha vuelto a demostrar que juega en el corto plazo, y no

6 En otros sectores que ya suponen un peso importante en el PIB español, como la construcción, el transporte o el turismo, lo que se persigue es una reorientación de objetivos y cambio de modelo de negocio. En el sector de la construcción se quiere fomentar un giro hacia actividades de alquiler y de rehabilitación, de mejora de la eficiencia energética y del consumo de agua en la edificación. Respecto al cambio en el sector del transporte, destacan el Plan Extraordinario de Infraestructuras Sostenibles y el apoyo al despliegue del vehículo eléctrico. Y para modernizar el sector turístico se amplía la financiación de proyectos turísticos sostenibles a través de la línea ICO-Futur-E y se pone en marcha un Plan de incentivos a la desestacionalización. Impulsos especiales se quieren dar también al sector de los servicios sociales mediante la introducción del IVA superreducido a servicios de dependencia y a la industria a través de un Plan Integral de Política Industrial 2020.

ha sido capaz de articular una alternativa creíble a la estrategia de economía sostenible del Gobierno. Mientras se niega a cooperar constructivamente en el diseño de las reformas estructurales que requiere la situación económica actual, propone medidas que significarían una vuelta al mismo modelo de crecimiento de la última década, con un desarrollo excesivo de sectores de actividad con escasa productividad, un alto nivel de consumo de recursos naturales y elevados impactos medioambientales.

La Ley de Economía Sostenible se ha visto sometida continuamente a ataques del PP, cuya visión puede verse en sus declaraciones:

- *“Esta Ley es una huida hacia adelante y una escapatoria de los verdaderos problemas de la economía española”* (Mariano Rajoy; ABC, 19.03.2010).
- *“La Ley de Economía Sostenible no es ni buena ni mala, es indiferente”* (Mariano Rajoy; La Cerca, 19.03.2010).
- *“De la crisis no se sale con leyes”* (María Dolores de Cospedal; ABC, 27.11.2009).

Pero la estrategia que esbozó el PP en noviembre de 2009 en el Parlamento como alternativa a la Ley de Economía Sostenible era una verdadera “huída hacia atrás”. Y desde entonces, ha venido defendiendo un retorno al modelo de crecimiento que alentaron los populares desde 1996. Sus referencias a aquella etapa se han venido multiplicando.

- *“Podemos salir de esta crisis. Se puede hacer porque ya se hizo en 1996”* (Libertad digital, 21.07.2008).
- *“A partir de 1996, con el nuevo Gobierno, España despegó (...) como lo hará si el PP recibe el apoyo mayoritario de los ciudadanos”* (PP, 2008a).

De nuevo, sorprende esta defensa del modelo de crecimiento que nos llevó a la crisis actual. Las medidas que el PP ha esbozado para regresar a este modelo son: aplicar un IVA superreducido al sector turístico y recuperar la deducción fiscal por compra de vivienda. Además, se propone reducir cotizaciones a la Seguridad Social, en una situación en la que el sistema de la Seguridad Social ya tiene costes excepcionalmente altos.

Igualmente ambigua e incoherente es su actuación frente a las otras reformas importantes que acompañan la Ley de Economía Sostenible. El PP se opuso a la reforma laboral, a pesar de haberla reclamado durante meses, también fue incapaz de apoyar con claridad la reforma de las pensiones sin sumarse al gran acuerdo social y económico con los sindicatos y los empresarios. Pero lo más grave es que tras apoyar la reforma del sector financiero en julio de 2010, terminó votando a

principios de 2011 en contra del Plan para sanear los bancos y cajas de ahorro en dificultades.

Esto demuestra de nuevo el carácter plenamente cortoplacista del PP, posicionándose en cada momento en contra de lo que haga el Gobierno y no respondiendo a las exigencias de cada situación. La Tabla 2 resume las contradicciones del PP en sus respuestas a las distintas fases de la crisis.

En conclusión, cuando había que gastar para rescatar la economía, Rajoy proponía apostar por el “mercado libre y el déficit cero”. Cuando era necesario reducir el déficit a través de un programa ambicioso y socialmente equilibrado, Rajoy proponía recortes plenamente estéticos y reducir los ingresos públicos, oponiéndose a la subida del IVA y pidiendo bajadas en otros impuestos. Y cuando el Gobierno planteó una estrategia de economía sostenible para transformar el modelo productivo y comenzó a aprobar reformas, Rajoy giró de nuevo la vista al modelo económico de 1996, con todos los desequilibrios estructurales que nos han llevado a la situación actual: sobredimensionamiento del sector de la construcción, escaso aumento de la productividad y fuerte endeudamiento con el exterior.

Tabla 2. El Gobierno y el PP y sus respuestas a la crisis

Fase de la crisis	Lo que hizo el Gobierno	Lo que ofreció Rajoy
FASE 1. DECLIVE Y RESCATE Caída del PIB y aumento del desempleo	AUMENTO DE GASTO Y ESTÍMULOS ECONÓMICOS Plan E, FEES y otras políticas de estímulo	RECORTE DE GASTOS Recorte del gasto público (sin precisar), eliminación de ministerios
FASE 2. ESTANCAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN Estancamiento del PIB y aumento del déficit	AUSTERIDAD Y AUMENTO DE INGRESOS Plan de consolidación fiscal mixto: reducción de gasto corriente, aplazamiento de inversiones Ligeramente aumento de ingresos (IVA, tipo máximo del IRPF e impuestos especiales)	BAJADA DE IMPUESTOS Y RECORTE DE INGRESOS Votó en contra en el Parlamento (aumentando el riesgo para la credibilidad internacional de la economía española) Reducción de impuestos (IVA, Sociedades e IRPF)
FASE 3. REFORMAS Y RECUPERACIÓN Recuperación del PIB y desaceleración del desempleo	ECONOMÍA SOSTENIBLE, REFORMAS Y NUEVA AGENDA SOCIAL Ley de Economía Sostenible Reformas sectoriales: mercado laboral, sistema de pensiones, sistema financiero Extensión de ayudas sociales a personas que agotan subsidio de desempleo vinculadas a nuevas políticas activas de empleo	VUELTA AL MODELO ECONÓMICO TRADICIONAL Oposición a las reformas Desgravación fiscal a la compra de vivienda IVA superreducido para el turismo

Fuente: elaboración propia

3

La salida de la crisis con un gobierno de derechas à la Cameron

“El plan de Cameron da confianza; yo haría algo similar en España”
Mariano Rajoy, *El País*, 31 de octubre de 2010

3.1 Un ajuste fiscal más duro

Las declaraciones de Mariano Rajoy con respecto a cómo haría frente a la crisis económica de estar en el Gobierno permiten vislumbrar las líneas centrales del que sería el programa económico del PP de llegar al poder. Así, como el propio Rajoy ha señalado recientemente, un Gobierno del PP presidido por él desarrollaría en España un plan similar al que ha puesto en marcha el Gobierno británico de Cameron tras ganar las elecciones en Reino Unido el pasado año.

El programa económico del Gobierno conservador-liberal de Reino Unido se ha centrado esencialmente en un proceso de consolidación fiscal basado en la reducción del gasto público. Para el periodo 2010-2014, el recorte del gasto previsto es de 83.000 millones de libras esterlinas, es decir, más de 95.400 millones de euros⁷, lo cual significa en términos relativos una reducción del gasto de un 5,6% del PIB⁹. Se trata del mayor recorte del gasto público realizado en el país desde la II Guerra Mundial (*Institute for Fiscal Studies*, 2010).

Pero lo más llamativo de este plan no es tanto su tamaño como su composición y las consecuencias para el Estado del bienestar y el tejido social del país. El propio

7 Cifra de consolidación discrecional total prevista en el presupuesto de junio de 2010 para 2014-2015.

8 Tipo de cambio en diciembre de 2010: BE, 1€ = 0,87£ (Fuente: Banco de España).

9 Calculado sobre el PIB de Reino Unido en 2010 (Fuente: Eurostat).

Cameron advertía cuando anunció los recortes que estos “cambiarían la vida británica” (*The Guardian*, 6.06.2010), aunque no precisó en qué dirección.

En primer lugar, el ajuste fiscal británico se ha centrado en el recorte de gasto, que en 2014-2015 supondría un 80% de la consolidación fiscal total (130.000 millones de euros), mientras que el aumento de los ingresos solo representaría un 20% de la misma. En segundo lugar, la reducción del gasto público afecta fundamentalmente a aspectos clave del Estado de bienestar, al eliminar o recortar prestaciones y servicios básicos (más del 30% de la reducción del gasto se centra en los sectores sociales).

Como resultado global, tal y como señala el Instituto de Estudios Fiscales británico, el recorte tendrá un efecto claramente regresivo, al ser las familias de rentas más bajas las que resultarán más perjudicadas y, por tanto, en el medio o largo plazo alterará la composición de la sociedad británica aumentando la desigualdad.

La economía británica es aproximadamente 1,6 veces mayor que la española¹⁰, por lo que un ajuste similar para España en términos relativos al PIB supondría un objetivo de recorte del gasto público de alrededor de 60.000 millones de euros, justo el doble del recorte planteado por el Gobierno socialista en España.

Cuadro 1. Ajustes fiscales conservadores y progresistas*

Los ajustes fiscales, cuyo objetivo es reducir el déficit público, difieren normalmente en su tamaño, velocidad y composición. Estos tres aspectos determinan el impacto de un proceso de ajuste, económico y social, y vienen dados por los objetivos concretos del Gobierno y los valores o modelo de sociedad en que estos se basan. Con respecto a la composición, un ajuste puede centrarse más en la reducción del gasto o en el aumento de los ingresos. Asimismo, la reducción del gasto se puede hacer a costa de diferentes partidas, igual que los ingresos se pueden aumentar de diferentes formas.

Es en estas decisiones donde radica la naturaleza progresista o conservadora de un ajuste. Así, según la literatura especializada, los gobiernos conservadores han tendido a lo largo del siglo XX a realizar ajustes centrados en la reducción del gasto, mientras que los progresistas buscan un mejor equilibrio entre recortes del gasto y aumentos de los ingresos, preservando el gasto productivo y social, y aumentos de los ingresos por la vía que menos distorsione la actividad económica y sea más equitativa.

* Para un desarrollo en profundidad sobre la economía política de los ajustes fiscales véase Mulas-Granados, C. (2006) *Economics, Politics and Budgets*. Palgrave MacMillan.

Fuente: Mulas-Granados, C. y de Paz Nieves, C., *Ajustes fiscales progresistas*, Fundación IDEAS (pendiente de publicación).

10 Valores del PIB en 2010 (miles de millones de euros): España 1.062, Reino Unido 1.697. Fuente: Eurostat.

El plan de consolidación fiscal que ha puesto en marcha el Gobierno en España supone un recorte del gasto para 2010-2011 de aproximadamente 27.000 millones de euros¹¹. Pero, a diferencia del británico, busca un mayor equilibrio entre la reducción del gasto y aumento de los ingresos, con medidas adicionales como el aumento del IVA, de los impuestos sobre el capital o de los impuestos especiales. Así, mientras que la aportación de la reducción de gastos y el aumento de ingresos para la consolidación fiscal se mantiene en una proporción de 80% y 20%, respectivamente, en el caso británico, en España estas aportaciones serán del 40% (recorte de gasto) y del 60% (subida de ingresos)¹². Además, y por encima de otras diferencias, los recortes del gasto desarrollados por el Gobierno español han preservado el Estado del bienestar y la igualdad y la cohesión social como objetivos prioritarios. De hecho, un recorte de 60.000 millones como el que podría plantear Rajoy (siguiendo el ejemplo de Cameron) sería equivalente a dos veces lo que España destinará en 2011 a las prestaciones por desempleo, la tercera partida de gasto más importante en los Presupuestos Generales del Estado.

De todo lo anterior, se puede concluir, por tanto, que el hipotético programa económico del PP liderado por Rajoy, de llegar al Gobierno, tendría los siguientes rasgos:

1. Aplicaría, como el Gobierno de Cameron, un radical y estricto plan de consolidación fiscal.
2. Este plan estaría basado fundamentalmente en un recorte del gasto público.
3. Los recortes principales afectarían al gasto social, con un efecto regresivo y un importante retroceso del Estado en la prestación de servicios públicos.

Las siguientes tres secciones presentan un análisis más pormenorizado de los recortes realizados en Reino Unido y de sus potenciales consecuencias en el ámbito de las políticas de bienestar, el sector público en general y la educación. Este análisis permitirá extrapolar sus resultados al caso de España, estimar el tamaño y posibles consecuencias del desarrollo de un plan de ajuste similar en nuestro país por parte del PP.

11 El ajuste de gasto se resume en las siguientes cifras: 7.000 millones de euros previstos en los Presupuestos Generales del Estado para 2010; 5.000 millones adicionales aprobados en Consejo de Ministros el 29 de enero de 2011 (Actualización del Programa de Estabilidad 2010-2013 y de los planes de Acción Inmediata 2010 y de Austeridad 2011-2013); 15.000 adicionales para 2010-2011 con las medidas extraordinarias de reducción del déficit público aprobadas en mayo de 2010.

12 Estimación propia basada en proyecciones de AMECO.

3.2 Eliminación de prestaciones sociales

El Plan de ajuste del Gobierno británico pone un particular énfasis en el ámbito de la política social. Así, se prevé una reducción del gasto en bienestar, que incluye diversas prestaciones y ayudas relacionadas con desempleo, pensiones, familias con niños y discapacitados, de aproximadamente 22.000 millones de euros entre 2010 y 2014; es decir, el equivalente a un 1,3% del PIB británico. Las prestaciones afectadas incluyen:

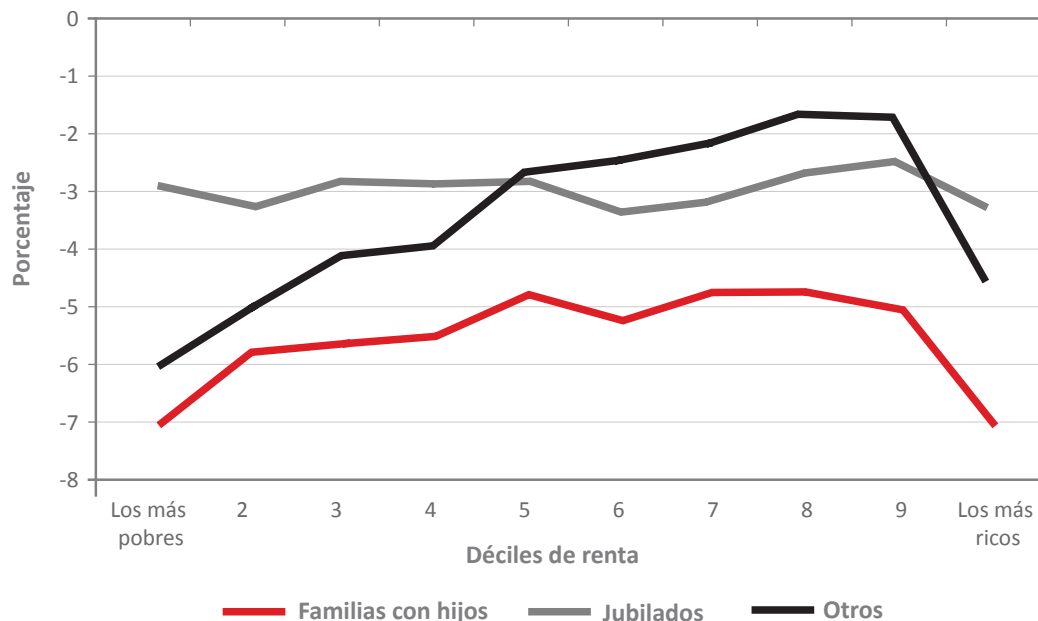
- Ayudas para la invalidez, 2.298 millones de euros.
- Ayudas a la vivienda, 230 millones de euros.
- Subsidios al pago de impuestos locales para rentas bajas (*Council Tax Benefit*), 574 millones de euros.
- Ayudas a la natalidad y desgravaciones fiscales por hijos, 3.218 millones de euros.
- Deducciones fiscales y ayudas para hogares con rentas bajas, relacionadas con situación de desempleo o jubilación, 2.973 millones de euros).

El impacto de todo este conjunto de recortes se ha analizado en un estudio elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales británico (IFS, 2010), en el cual se muestra que los grupos sociales de rentas más bajas se van a ver especialmente perjudicados por la política de Cameron. El resultado más destacado de dicho estudio es que el conjunto de la ciudadanía experimentará un descenso medio de renta que va a estar situado alrededor del 2% como consecuencia del plan de ajuste. Sin embargo, hay grupos sociales que van a estar más afectados: las rentas de los pensionistas van a caer un 3% en promedio, las familias con hijos un 5%, y hasta un 7% en los casos de familias con rentas más bajas (Gráfico 1).

Además, el sistema británico, que contempla un amplio conjunto de ayudas para personas de rentas bajas como el subsidio para el pago del alquiler de vivienda (*housing benefit*), ayudas de renta mínima (*income support*), ayudas para la búsqueda de empleo (*job-seeking allowance*), ayudas para discapacitados (*incapacity benefit*), etc., está actualmente en revisión, ya que el Gobierno de Cameron se ha propuesto reemplazarlo por un sistema de subsidio único (*universal credit*).

El objetivo anunciado para este nuevo sistema es simplificar los tipos de ayudas, incentivar el trabajo y reducir el fraude. Pero detrás se esconde también un objetivo prioritario de recortar el gasto público en ayudas sociales. Bajo la excusa de

Gráfico 1. Impacto de las medidas fiscales de Cameron sobre distintos grupos de renta



Fuente: Institute for Fiscal Studies (2010)

unificar la información sobre los subsidios que percibe una misma persona y darle una ayuda única, en lugar de poder percibir distintos tipos de prestaciones sociales independientes y desgravaciones fiscales, los pagos se van a graduar de forma que se ajusten a las necesidades totales, y se reduzca el pago medio por persona beneficiada.

Aunque el sistema de protección social español es distinto del británico, el recorte que podría plantear Rajoy en términos comparativos sería cercano a 13.000 millones de euros en gasto social. Algunas de las prestaciones y ayudas públicas similares a las más afectadas por los recortes de Cameron en nuestro país y, por tanto, susceptibles de eliminación o recorte en el caso de que Rajoy desarrollase un plan similar en España, podrían incluir:

- Renta básica de emancipación, con 276.000 beneficiarios desde su puesta en marcha hasta la fecha.
- Becas y ayudas a enseñanza postobligatoria no universitaria, que durante el curso académico 2008-09 benefició a 505.000 estudiantes a los que se destinaron 365 millones de euros.
- Deducciones fiscales por hijos.

- Pensiones mínimas no contributivas, de las que se benefician hoy más de 450.000 jubilados (un 71% mujeres).
- Ayudas para parados que agotan la prestación por desempleo.
- Ayudas a la dependencia, a las que tienen derecho más de 700.000 personas en tal situación hoy.

La eliminación o limitación de las políticas sociales mencionadas en nuestro país supondría un enorme retroceso en nuestro Estado del bienestar, uno de los más avanzados del mundo, así como un aumento importante de las desigualdades y un deterioro notable de la cohesión social, en contra de los objetivos prioritarios del actual Gobierno, que no solo no ha reducido el gasto social con el ajuste fiscal, sino que lo ha aumentado con respecto a años anteriores (mientras que en 2009 el gasto social fue de 174.211 millones de euros, en 2010 ha sido de 180.848 millones y en 2011 de 183.231 millones). Tales medidas aumentarían la vulnerabilidad y desprotección de los colectivos más desfavorecidos, así como la pobreza relativa de las familias con niños y de los mayores con ingresos o recursos más limitados, y reducirían las oportunidades de niños y jóvenes de familias de rentas bajas.

3.3 Reducción del Estado y “Gran Sociedad”

El plan de recorte del gasto de Reino Unido supone asimismo una reducción media del presupuesto de casi todos los ministerios o departamentos gubernamentales del 13% hasta 2014. El anuncio de que estos recortes se podrán traducir en la práctica en el despido masivo de alrededor de 500.000 funcionarios ha sido especialmente polémico, y ha provocado expresiones de rechazo diversas entre el funcionariado británico. Una reducción de estas dimensiones supondría prescindir de alrededor del 8% de los trabajadores del sector público en Reino Unido en los próximos cuatro años. Asimismo, se establece el incremento de las contribuciones sociales para los funcionarios y, a partir de 2011, se prevé la congelación de sueldos durante 2 años por un importe aproximado de 3.800 millones de euros.

Los presupuestos que se verán más afectados por los recortes son el de Transporte, el de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes, el de Interior, el de Seguridad, el de Empresas, Innovación y Formación, Medio Ambiente y Medio Rural, y el de los Gobiernos Locales y Comunitarios. Este recorte supone la puesta en práctica de la visión conservadora de la *Big Society* (“Gran Sociedad”), basada en el argumento de que el Estado debe reducir su tamaño y eliminar funciones paternalistas que la sociedad civil y el sector privado están llamados a desempeñar.

El tamaño de los recortes en el presupuesto público de las diferentes administraciones solo es comparable en Reino Unido con los efectuados tras la II Guerra Mundial. Junto con la eliminación o reducción de prestaciones sociales, estos recortes sientan las bases de un importante retroceso del Estado en todos los ámbitos, especialmente en los niveles local y comunitario y en los sectores social, medioambiental, cultural y de la seguridad. Por sus dimensiones e implicaciones, se trata de una verdadera y radical transformación del modelo de Estado y sociedad británicos, como ya advirtió Cameron cuando ganó las elecciones, que verá reducido su tamaño significativamente a favor de una mayor presencia del sector privado e informal.

En el caso del departamento de “Cultura, Medios de Comunicación y Deportes”, se prevé un recorte total de un 25% de su presupuesto. Esta fuerte reducción presupuestaria se logrará con la eliminación de varios entes públicos como el consejo del cine, el consejo de bibliotecas y archivos y la comisión para arquitectura y áreas urbanas. Asimismo, Interior y Justicia verán reducido su presupuesto en un 23% en términos reales, lo que necesariamente se traducirá en importantes recortes de personal. El presupuesto de la policía, en concreto, se reducirá en un 20%. Aunque el PP y Rajoy nunca han propuesto explícitamente una cifra concreta de reducción en el número de empleados públicos, en sus declaraciones se dejan entrever mensajes que implican recortes importantes en el empleo público. Así, por ejemplo, Rajoy habla frecuentemente de eliminar duplicidades administrativas, o de prescindir de organismos autónomos o empresas públicas: “...en España hay casi 4.000 empresas públicas y entes públicos. Fíjese si ahí hay margen. También sobran asesores y personal de confianza en todas las administraciones”¹³. Y en su programa marco para las elecciones autonómicas de mayo de 2011 titulado “Menos Estado, mejor sociedad”, se hacen referencias continuadas y veladas al concepto de la “Gran Sociedad” de Cameron, así como al conflicto entre el espacio y los ámbitos de gestión públicos y privados.

Un recorte similar al de Reino Unido supondría en España una reducción significativa del presupuesto estatal destinado a importantes áreas del Gobierno central que el PP critica reiteradamente, como cultura y asuntos sociales, que ya cuentan con presupuestos restrictivos en los Presupuestos Generales del Estado de 2011. Asimismo, y en línea con las políticas de Cameron, el PP podría llevar a la práctica un recorte sustancial del Gobierno local a través de la reducción de las transferencias de los Presupuestos Generales. Un recorte similar al británico supondría reducir 3.800 millones de euros la financiación de los ayuntamientos en el caso de España.

13 Entrevista a Rajoy, *El Mundo*, 30 de enero de 2011.

Un drástico recorte del sector público también se traduciría necesariamente en una reducción del número de funcionarios públicos. Si se aplicaran aquí medidas similares a las que plantea Reino Unido (con más de 6 millones de empleados públicos), esto significaría que del total de 3,1 millones de empleados públicos que trabajan en nuestro país, alrededor de 250.000 serían despedidos (Tabla 3).

Tabla 3. Recortes empleo público. Escenario Rajoy-Cameron

	Total empleo público	Recorte del 7,9%
Reino Unido	6.195.000*	489.405
España	3.168.500**	250.312

Fuentes: * *Office for National Statistics* (ONS, 2010); ** Instituto Nacional de Estadística (INE, 2010)

3.4 Encarecimiento de la educación pública

Aunque aparentemente Cameron trata el ámbito de la educación con más cautela que otros servicios públicos y solo se ha establecido una congelación del presupuesto en educación para los próximos cuatro años, sí que se prevé un fuerte recorte del 60% en el ámbito de las inversiones en capital público vinculado a la educación (infraestructuras y equipamientos), con la eliminación del programa “Construyendo escuelas para el futuro”.

Dada la amplia extensión de las redes de colegios e institutos públicos británicos, y su antigüedad, puede anticiparse que la reducción de los gastos en nuevas inversiones, mantenimiento de las instalaciones y adquisición de nuevos equipos puede redundar en una caída de la calidad de la educación a medio plazo. Aunque las infraestructuras educativas en España son relativamente más modernas que las británicas, un recorte similar al de Reino Unido supondría también un importante retroceso en la provisión de servicios de educación en el ámbito público. Esto es algo que ya se observa en las comunidades autónomas gobernadas por el PP, como la de Madrid, en la que desde hace años se están canalizando recursos públicos hacia la educación privada, en detrimento de la calidad de la educación pública.

Una de las medidas más controvertidas del ajuste de Cameron, y que ha tenido una fuerte contestación por parte de los sindicatos de estudiantes británicos, ha sido la liberalización de las tasas universitarias. De acuerdo con las estimaciones realizadas, se espera que las tasas puedan aumentar alrededor de un 245% de media (un 300% en el caso de los aumentos superiores). En Reino Unido, esto significa que un estudiante, que actualmente paga en promedio unos 4.200 euros anuales, podría ver aumentadas las tasas hasta 10.300 euros. Esto supondría te-

ner que pagar, por los estudios completos de cuatro años, unos 41.000 euros de media por alumno titulado.

Trasladando esta medida al caso de España, donde las matrículas universitarias son relativamente menores que en las universidades británicas (alrededor de 1.200 euros por año), un incremento como el introducido por Cameron podría significar tener que pagar casi 3.000 euros al año de matrícula, o 12.000 euros por título de 4 años, lo que supondría una importante barrera de acceso a la educación superior para muchos estudiantes de rentas bajas.

3.5 Renacimiento nuclear y abandono de las energías renovables

Otro ámbito en el que probablemente las medidas adoptadas por Cameron en Reino Unido pueden ser un buen indicador de la que podría ser la futura agenda del PP si se produce un cambio de Gobierno en 2012 es la política energética.

Para el Gobierno de Cameron, que podría servir de inspiración a un Gobierno de Rajoy en España, la promoción de la energía nuclear incluyendo la construcción de nuevas centrales es una línea central de actuación de su política energética vinculada a la lucha contra el cambio climático. Dada la inevitable necesidad de llevar a cabo un impulso público si se deseara promover la construcción de nuevas centrales, ya que por sí solo el capital privado no está apostando de forma unilateral por esta tecnología en ningún país del mundo (ni siquiera en el caso de Estados Unidos, donde el Gobierno americano tiene creado desde 2005 un fondo de ayudas para la financiación de las inversiones en nuevas instalaciones nucleares que nadie utiliza), el Gobierno británico apuesta por crear un entorno regulatorio muy favorable que incentive la inversión privada. Sus cálculos prevén que la energía nuclear llegue a cubrir el 25% de sus necesidades energéticas en 2025, lo que implicaría la construcción de 8 nuevas centrales (con un coste aproximado de 80.000 millones de euros) (*BBC News*, 19.10.2010).

Para incentivar la inversión en nucleares incluso se está debatiendo el uso de contratos con mecanismos de compensación a las eléctricas en el caso de que los precios energéticos se queden por debajo de lo esperado (*Bloomberg*, 15.12.2010).

No obstante, por el momento estas medidas están únicamente en fase de estudio, y el Gobierno británico deberá dar pasos en firme si quiere realmente que su apuesta nominal por la energía nuclear se comience a traducir en resultados efectivos a medio plazo. Un problema añadido aún no resuelto satisfactoriamente es el coste para el tratamiento o almacenamiento de los residuos nucleares que, según una estimación de Greenpeace podría ascender a 76.000 millones de libras, cuya financiación aún estaría por determinar.

Hasta ahora, el discurso oficial del Partido Popular no ha ido más allá de la promesa de mantener un mix energético equilibrado, basado en todas las fuentes disponibles, especialmente aquellas de bajas emisiones y bajos costes de producción, como la energía nuclear. En su programa electoral de 2008, el PP defendía la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares, así como un mayor esfuerzo en la investigación para la reutilización de los residuos. FAES, por su parte, se muestra claramente a favor de la energía nuclear en un reciente documento sobre política energética. Este estudio, encargado por Rajoy en el patronato de FAES y posteriormente asumido por el PP, presenta propuestas muy concretas en esta materia: (1) revocar el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña; (2) asegurar el alargamiento de la vida de las centrales nucleares actualmente en operación con carácter ordinario hasta los sesenta años; y (3) iniciar un plan de selección de emplazamientos para nuevas centrales nucleares.

Aunque el documento de FAES no concreta el número de nuevas centrales que proponen construir en España, sí hablan en plural, por lo que podemos asumir que están pensando en cifras de dos en adelante. Para calcular el coste de la inversión que tendría que avalar el Estado impulsado por un hipotético Gobierno de Rajoy, baste recordar que la última central en construcción en Europa (Finlandia) va a costar cerca de 6.000 millones de euros. Por tanto, si el PP siguiera las recomendaciones de Cameron y la FAES, harían falta dos nuevas centrales para que la energía nuclear pasara de proporcionar el 21% del consumo energético actual hasta el 25% planteado en Reino Unido. Ese giro energético tendría un coste inicial asegurado de casi 15.000 millones de euros.

La posición pronuclear del PP de Rajoy ha estado sujeta a su tacticismo habitual, pretendiendo ocultar su compromiso público con este tipo de energía, desde el mismo momento en que se supo del accidente de la central nuclear de Fukushima en Japón. En este contexto, Cospedal ha llegado a desmarcarse de FAES afirmando que “el PP es el PP y FAES es FAES”. Sin embargo, el secretario general de FAES, Jaime García Legaz ha replicado: “FAES y el PP dicen lo mismo, el informe es el resultado de un profundo análisis de un año de trabajo en línea con el PP. Ha habido un giro nuclear progresivo” (*El País*, 20.3.2010, pág. 28).

3.6 Contra la inmigración, por principio

El objetivo central de la política de inmigración que ha puesto en marcha Cameron es el control de los flujos de entrada de trabajadores al país, que quiere limitar a un máximo de 100.000 personas al año, ya que los niveles alcanzados en los últimos años del Gobierno laborista (en torno al doble de esa cifra) le parecen excesivos.

Se trata de una política que no está motivada por razones económicas, sino que encuentra sus raíces en una estrategia de reforzamiento de la identidad nacional británica, que en ocasiones tiene derivas xenófobas. Cameron ha llegado a responsabilizar a los inmigrantes de la crisis económica, y ahora plantea que se impongan límites más restrictivos marcados por los flujos netos (incluyendo en el cálculo a los británicos que salen del país, frente a los extranjeros que entran en Reino Unido). La lógica que subyace es similar a la empleada por Sarkozy o Rajoy (desde la campaña de 2008). Se trata de obviar la racionalidad económica del proceso migratorio, dedicándose a seleccionar qué inmigrantes son autorizados a entrar en el país y cuáles no, en función del número de nacionales que hayan abandonado el país. Una política inmigratoria de este tipo abre infinitas posibilidades a la discriminación y amenaza con violar el principio de igualdad ante la ley de los ciudadanos (por el mero hecho de haber nacido en otro país). Cameron ha planteado que la política de control de la cantidad de inmigrantes debería acompañarse de una selección del perfil deseable, en función de las necesidades. De momento, ha apuntado que esas necesidades las marcaría el mercado de trabajo, aunque en la medida hay un cierto punto de discriminación por capacidad intelectual de las personas. Según sus afirmaciones, los altos ejecutivos y trabajadores muy cualificados no tendrían limitaciones, pero sí se aplicarían cuotas para trabajadores no cualificados y estudiantes.

La lógica económica indica que los flujos migratorios deben estar relacionados con las necesidades de las empresas. De lo contrario, unos límites establecidos a priori, como los establecidos por Cameron, podrían limitar el potencial de crecimiento de sectores concretos, cuya dinámica es imposible predecir con antelación. Por eso, esta política de inmigración discriminatoria ya ha sido criticada en Reino Unido por parte de empresarios e instituciones educativas. La patronal británica ya ha hecho saber que les faltarán cerca de 40.000 trabajadores inmigrantes si se aplican los planes de Cameron. Como ocurre en España, los inmigrantes no ocupan puestos de trabajo de los nacionales, sino que hacen tareas complementarias del proceso productivo que los trabajadores autóctonos ya no quieren hacer. Asimismo, el sector educativo también ha protestado contra los planes de Cameron. Es aquí donde más demagógica parece la decisión, porque los estudiantes universitarios tienen un gran potencial económico futuro y a Reino Unido le convendría que se quedaran allí. Sin embargo, la idea de limitar la entrada de estudiantes parece estar desvinculada de lógica económica y parece perseguir únicamente la reducción futura de inmigrantes en el país. Para la asociación que reúne a las universidades británicas más importantes del país (un sector que representa más de 25.000 millones de libras anuales) la política inmigratoria del actual Gobierno hará sin duda perder atractivo a las universidades e instituciones y eso tendrá un coste importante en términos de formación de “los mejores cerebros” y crecimiento innovador futuro en Reino Unido (*Financial Times*, 6.02.2011).

Si el PP trasladase al Gobierno de España unos criterios similares a los que propone Cameron, bajo una política inmigratoria basada en esa misma irracionalidad económica, sus líneas de acción más inmediatas serían las siguientes:

- **Restricción:** al igual que Cameron, Rajoy impondría el corte del flujo de inmigrantes, por principio. Esto podría generar tensiones en la oferta de trabajo para determinadas tareas de menor cualificación que los empresarios españoles tendrían dificultades en cubrir. Asimismo, se reducirían las aportaciones netas positivas que los inmigrantes realizan a las cuentas públicas a través de sus cotizaciones a la Seguridad Social.
- **Selección:** la política inmigratoria del PP polarizaría la estructura social, enfatizando las diferencias derivadas del origen de las personas que la componen. Habría dos clases, la clase privilegiada, los autóctonos, y la clase inferior, los inmigrantes. La insistencia en promover la inmigración con más afinidad cultural desembocaría en una inmigración selectiva respecto al origen, discriminando a aquellos cuya lengua materna no sea el castellano.
- **Estancamiento:** los límites a priori del número de inmigrantes que podría introducir Rajoy limitarían el potencial de crecimiento de algunos sectores, que en el proceso de recuperación económica pudieran necesitar superar esas cuotas arbitrarias para consolidar su expansión.

Rajoy ya ha apuntado cuáles son sus intenciones al proponer una reducción del número de inmigrantes¹⁴ y un “contrato de integración” (*El País*, 08.03.2011) para darles el permiso de residencia. No se trata más que de un guiño demagógico porque los trabajadores extranjeros que llegan a España y residen de forma legal (vinculados a un contrato laboral), ya están obligados por las mismas leyes que afectan a todos los españoles.

En todo caso, las consecuencias económicas para España de una política inmigratoria tan ideologizada serían evidentemente negativas. Más allá de los problemas demográficos que ello generaría (con su impacto negativo sobre la estabilidad de nuestras prestaciones sociales a largo plazo), los impactos a corto plazo también serían importantes.

En este sentido, todos los expertos coinciden en que para recuperar los niveles de actividad anteriores a la crisis habrá que incorporar nuevos activos al mercado de trabajo. Una parte será cubierta por españoles que hoy están en paro, pero otra tendrá que ser cubierta por mano de obra extranjera, igual que antes de

14 “No pueden entrar todos. No cabemos” (*El País*, 28.02.2008).

la crisis. Más aún, dado que el cambio de modelo productivo requerirá que la mano de obra nacional se concentre en los nuevos sectores que precisan mayor cualificación, habrá sectores como la hostelería, el turismo, los servicios sociales y una parte de la construcción que volverán a necesitar de nuevos flujos migratorios. Entre 2007 (año de máximo crecimiento antes de la crisis) y 2010 (cuando dejó de caer el PIB), la economía española creció de media un 0,6% anual. Para lograrlo, debieron venir a trabajar a nuestro país una media 270.000 extranjeros al año¹⁵. Por tanto, una reducción de esas cantidades del 50% (hasta 135.000 anuales), similar a la propuesta por Cameron, podría reducir el crecimiento potencial de nuestra economía en 0,3 décimas del PIB, al inicio del próximo ciclo de crecimiento.

3.7 Privatizar hasta los bosques

Otra de las políticas más controvertidas dentro del plan de Cameron ha sido el intento de ofrecer al sector privado un total de 258.000 hectáreas de monte y campo que gestiona actualmente la Comisión Forestal, un ente estatal. Se trata de un total de 1.500 bosques públicos, con un valor estimado de unos 280 millones de euros, que el Gobierno de Cameron planteaba traspasar al sector privado para su gestión y para obtener recursos financieros.

El fuerte rechazo por parte de asociaciones ecologistas y ciudadanos particulares ha paralizado por el momento este proyecto, que no obstante refleja la visión conservadora del patrimonio público: todo aquello que no sea absolutamente imprescindible mantener dentro del ámbito del sector público es susceptible de ser vendido al sector privado.

En el caso de España, la amplitud de nuestro territorio natural protegido puede hacer caer a un Gobierno conservador en la misma tentación de considerar que, en lugar de dedicar recursos públicos y generar empleo para la conservación y mejora del medio ambiente, es preferible obtener ingresos financieros de su venta o concesión al sector privado, para que empresarios individuales puedan hacer uso de unos recursos que deberían mantenerse indudablemente en el ámbito colectivo para disfrute de todos los ciudadanos.

15 El crecimiento del PIB se repartió así: 2007 (+3,7%); 2008 (+1,2%); 2009 (-3,8); 2010 (-0,1). Crecimiento medio anual 2007-2010 (-0,62%). A su vez, según el Anuario de la Inmigración en España, la entrada de inmigrantes fue la siguiente: 2007 (+560mil); 2008 (+480mil); 2009 (+80mil) y 2010 (-10mil). Entrada de inmigrantes promedio 2007-2010: 277mil/año. En este sentido, hay que recordar que el INE calcula una necesidad de entrada de inmigrantes cercana a los 400.000 al año de media para los próximos años, en función de la evolución prevista de nuestra estructura demográfica.

La privatización de la gestión de un espacio forestal similar al que se considera en Reino Unido en nuestro país, podría poner en riesgo la ejemplar gestión sostenible de una cuarta parte del más del millón de hectáreas certificadas en nuestro país, lo que supondría un enorme retroceso en este ámbito y podría tener enormes consecuencias medioambientales, para la biodiversidad y, en último término, económicas y sociales.

En definitiva, la hipotética traslación de las medidas de Cameron en Reino Unido a una España gobernada por Rajoy podría resumirse de la manera que recoge la Tabla 4.

Tabla 4. La España de Rajoy si aplicara las recetas de Cameron

MEDIDAS	EL REINO UNIDO DE CAMERON	LA ESPAÑA DE RAJOY
Ajuste fiscal más duro	95.400 M€ recorte total	60.000 M€ recorte total
Eliminación de prestaciones sociales	22.000 M€ recorte social	13.000 M€ recorte social
Reducción del Estado	500.000 despidos funcionarios	250.000 despidos funcionarios
Encarecimiento de la educación universitaria	de 4.200€ a 10.300€ de matrícula	de 3.000€ a 12.000€ de matrícula
Renacimiento de la energía nuclear	8 nuevos reactores (80.000 M€)	2 nuevos reactores (13.000 M€)
Contra la inmigración	Límite 100.000 (caída 0,2 PIB)	Límite 135.000 (caída 0,3 PIB)
Privatización de bosques	258.000 ha a manos privadas	250.000 ha a manos privadas

Fuente: elaboración propia

4

Rajoy 2012: ¿generando confianza?

“Confiamos en las posibilidades de España, en las capacidades de nuestra sociedad. La confianza es, en sí misma, un motor de mejora. La confianza es necesaria y posible porque las cosas pueden y deben cambiar” (PP, 2011).

La palabra que más repite Mariano Rajoy en todos sus discursos es “confianza”. El PP apela constantemente a la confianza de los empresarios y los ciudadanos como motor de la recuperación económica, pero no llega a precisar en qué medidas concretas debe apoyarse esa confianza. Tampoco explica con claridad cuál es el modelo socioeconómico que propone a los españoles para que merezcan esa confianza a la que tanto apelan.

Dada la incertidumbre existente en torno al modelo socioeconómico que desarrollaría el PP si llegara al Gobierno, este trabajo ha permitido vislumbrar algunos de los rasgos centrales de ese modelo. Ningún aspecto de su modelo económico, social o medioambiental, parece merecer la confianza que reclama, a tenor de las características que hasta hoy hemos conocido por sus declaraciones o las de sus colaboradores. Las características del modelo de Rajoy serían las siguientes:

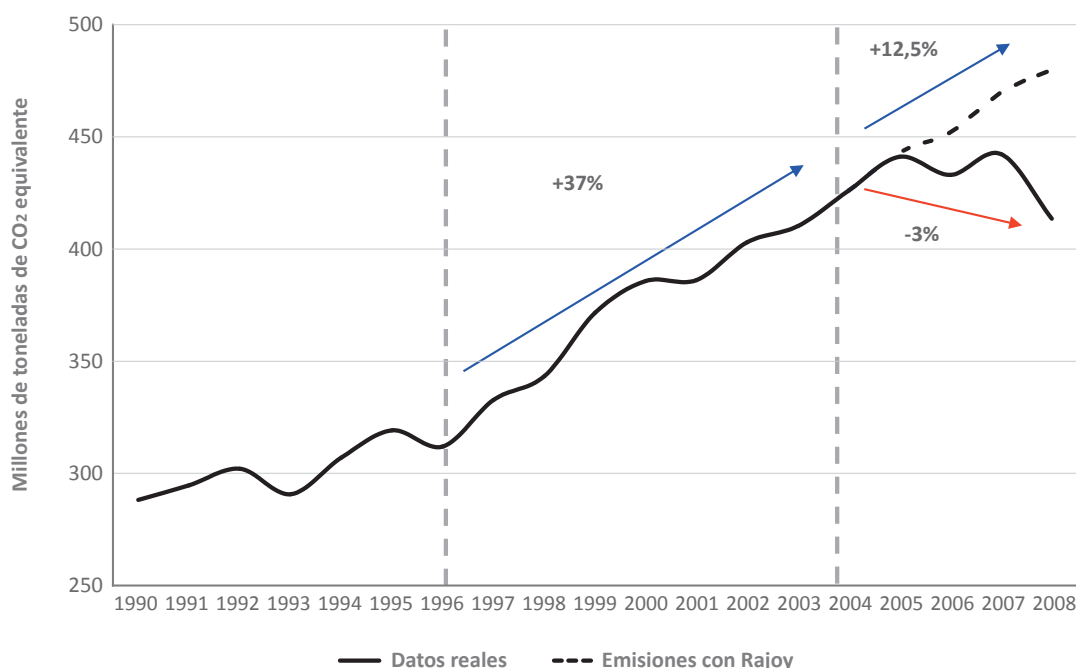
- **Modelo económico especulativo:** las escasas medidas de carácter económico que ha propuesto Rajoy para su acción de Gobierno si alcanza el poder en 2012 (reducción del IVA para el turismo al 4%, reintroducción de la desgravación fiscal a la compra de vivienda, una reforma laboral más profunda) nos indican claramente el modelo económico que tendría como referencia la política del PP: la “vuelta al ladrillo”, un impulso económico a través de una nueva burbuja especulativa basada en la construcción de viviendas e infraestructuras, el turismo tradicional de “sol y playa”, y otras actividades de poco valor añadido que son de baja productividad y de un alto consumo de recursos naturales.
- **Modelo social insolidario y excluyente:** las constantes negativas del PP de Rajoy a las medidas sociales desarrolladas por los Gobiernos socialistas

desde 2004 se pueden agrupar en dos bloques: por un lado, ha torpedeado las iniciativas que pretendían expandir el Estado de bienestar (en especial la Ley de la dependencia, que ha encontrado en Madrid o Valencia sus mayores escollos¹⁶). También ha ninguneado las medidas que perseguían aumentar las rentas de los grupos sociales más desfavorecidos en nuestro país¹⁷. Y, además, ha declarado, a través de miembros de su entorno, su disposición a privatizar algunos pilares básicos del Estado de bienestar¹⁸. Por otro lado, Rajoy también ha mostrado su lado más intolerante y excluyente al plantar batalla contra todas las leyes que avanzaban en la igualdad de derechos de grupos sociales excluidos. Se opuso al matrimonio homosexual¹⁹, a la Ley de igualdad²⁰ o a la nueva legislación sobre el aborto, e incluso prometió derogar algunas de ellas si alcanzaba el Gobierno²¹.

- **Modelo ambiental insostenible:** cuando Aznar firmó el Protocolo de Kioto comprometiéndose a reducir las emisiones de CO₂ en un 15%, confiaba en que Rusia no se sumara al acuerdo y finalmente no tuviera que aplicarlo. La realidad fue que cuando Zapatero llegó al Gobierno, ni siquiera se había redactado el Plan de reducción de emisiones correspondiente, y como consecuencia de esa dejación las emisiones crecieron un 37% durante todo el periodo del anterior Gobierno popular (frente a una reducción del 3% lograda por el Gobierno socialista, véase Gráfico 2). La despreocupación por los temas ambientales quedó al descubierto en la anterior campaña electoral de 2008, cuando Rajoy apeló a su primo y confundió la meteorología con el clima.

-
- 16 Véase el último Informe del Defensor del Pueblo en el que destaca los retrasos en esas dos comunidades gobernadas por el PP. <http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/index2009.html>
- 17 Respecto al aumento de las rentas para grupos sociales vulnerables hay que recordar que desde 2004 la ganancia de poder adquisitivo para las pensiones mínimas de jubilación se sitúa en torno al 30%, y el salario mínimo ha aumentado gradualmente desde 460 euros en 2004 hasta los 600 euros en 2008. En los ocho años de Gobierno Aznar, en el que Rajoy era vicepresidente, las pensiones mínimas se revalorizaron a un ritmo inferior y el salario mínimo solo subió 70 euros, un 17% con respecto a los 390 euros que se cobraban en 1996.
- 18 Cristóbal Montoro lo dijo explícitamente: *“el PP apostaría por la reducción del gasto público, reordenar el Estado y privatizar los servicios sociales como la sanidad, la educación o la dependencia”* (*El País*, 02.11.2010).
- 19 Que ha permitido 12.000 matrimonios desde su entrada en vigor. El 31 de octubre de 2010, en una entrevista concedida a *El País*, Rajoy declaró que no se comprometía a mantener la ley si ganaba, incluso en el caso de que el Tribunal Constitucional la avalara.
- 20 En el caso de la Ley de Igualdad el Grupo Parlamentario Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra las listas electorales paritarias que contempla la ley. (*El País*, 25.06.2007).
- 21 Hay que recordar, en todo caso, que en su momento votó en contra de la ley que despenalizaba el aborto en España en determinados supuestos, pero no la derogó cuando tuvo ocho años de Gobierno para hacerlo. Habiendo votado en contra de la anterior Ley de interrupción voluntaria del embarazo, luego la defendió como buena sin necesidad de cambios.

Gráfico 2. Emisiones de gases de efecto invernadero. 1990-2008



Fuente: Inventario de emisiones, 2010. Ministerio de Medio Ambiente, Marino y Rural

En conclusión, según la evidencia dispersa recopilada en este trabajo, tanto la actitud de Mariano Rajoy durante la crisis como sus pronunciamientos respecto al futuro, surgieron que su agenda oculta nos haría volver al mismo modelo insostenible que nos ha hecho sufrir las consecuencias de la crisis de una manera mucho más dura que otros países de nuestro entorno. Además, podría desarrollar una agenda similar a la aplicada por Cameron en Reino Unido, caracterizada por una reducción de la capacidad del Estado para distribuir oportunidades y cohesionar la sociedad. Y, probablemente, avanzaría hacia un modelo productivo menos sostenible medioambientalmente. En realidad no sabemos si sería así, pero en todo caso, sería conveniente que lo aclarara, antes de solicitar la confianza de los ciudadanos.

Referencias

- ABC* (27.11.2009): “Rajoy afirma que la norma ‘solo empeora las cosas’”; http://www.abc.es/hemeroteca/historico-27-11-2009/abc/Economia/rajoy-afirma-que-la-norma-solo-empeora-las-cosas_1132204702658.html
- ABC* (19.03.2010): El Gobierno apenas cambia la Ley de Economía Sostenible y pide apoyo al PP para conseguir el pacto de Estado, <http://www.abc.es/20100319/nacional-nacional/consejo-ministros-economia-sostenible-201003190122.html>
- Balance del Plan E, <http://www.economiasostenible.gob.es/balance-del-plan-e/>.
- BBC News* (19.10.2010): “Q&A: New nuclear power stations in UK”; <http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-11564987>.
- Bloomberg* (15.12.2010): Cameron Energy Strategy May Roll Back Thatcher’s Policies to Cut Emission; <http://www.bloomberg.com/news/2010-12-15/cameron-energy-strategy-may-roll-back-thatcher-s-policies-to-cut-emissions.html>
- Boletín oficial de las cortes generales (2009): Serie D, Núm. 308; http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_308.PDF
- CE (2009): Comunicación para el Consejo Europeo de primavera; <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0114:FIN:ES:PDF>
- CE (2010): Europa 2020; http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/20100303_1_es.pdf
- Cotizalia* (18.08.2009): “María Dolores de Cospedal dice que la ayuda de 420 euros es un ‘engaño’ y un ‘insulto’ a los desempleados”; http://www.cotizalia.com/cache/2009/08/18/noticias_95_maria_dolores_cospedal_ayuda_euros.html
- Defensor del pueblo (2009): Informe anual; <http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/index2009.html>
- Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados 12, 2008; http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/PL/PL_012.PDF

- Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados 28, 2008; http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/PL/PL_028.PDF
- Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados 162, 2010; http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/PL/PL_162.PDF
- EC (2008): *A European Economic Recovery Plan*; http://ec.europa.eu/deutschland/pdf/recovery_plan_en_26.11.2008final.pdf
- El Economista* (18.04.2010): “Rajoy y Aguirre se embarcan en la campaña contra el IVA del Gobierno”; <http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/2068899/04/10/Rajoy-y-Aguirre-se-embarcan-en-la-campana-contra-el-IVA-del-Gobierno.html>
- El Imparcial* (24.10.2009): “Rajoy critica el nuevo Plan E porque no se debe gastar en hacer más aceras”; <http://www.elimparcial.es/nacional/rajoy-critica-el-nuevo-plan-e-de-5000-millones-porque-no-se-debe-gastar-en-hacer-mas-aceras-50366.html>
- El Mundo* (30.01.2011): “Con mi Gobierno habrá crecimiento sólido y empleo en dos años”.
- El País* (25.06.2007): “El PP recurre ante el Constitucional la Ley de Igualdad”; http://www.elpais.com/articulo/sociedad/PP/recurre/Constitucional/Ley/Igualdad/elpepusoc/20070625elpepusoc_4/Tes
- El País* (28.02.2008): “No pueden entrar todos. No cabemos”; http://www.elpais.com/articulo/espana/pueden/entrar/todos/cabemos/elpepiesp/20080228elpepinac_12/Tes
- El País* (25.06.2008): “Rajoy propone bajar impuestos y más ‘austeridad’ en el gasto público”; http://www.elpais.com/articulo/espana/Rajoy/propone/bajar/impuestos/austeridad/gasto/publico/elpepiesp/20080625elpepinac_4/Tes
- El País* (24.04.2009): “Rajoy propone bajar los impuestos para atajar el desempleo”; http://www.elpais.com/articulo/economia/Rajoy/propone/bajar/impuestos/atajar/desempleo/elpepueco/20090424elpepueco_6/Tes
- El País* (20.03.2010): “Los pronucleares velan armas en España (de momento)”; http://www.elpais.com/articulo/internacional/pronucleares/velan/armas/Espana/momento/elpepiint/20110320elpepiint_28/Tes
- El País* (12.05.2010): “Las 10 ‘contramedidas’ propuestas por Rajoy”; http://www.elpais.com/articulo/espana/contramedidas/propuestas/Rajoy/elpepuesp/20100512elpepunac_16/Tes

- El País* (22.08.2010): “Rajoy apuesta por bajar los impuestos de ahorro y sociedades”; http://www.elpais.com/articulo/espana/Rajoy/apuesta/bajar/impuestos/ahorro/sociedades/elpepuesp/20100822elpepunac_3/Tes
- El País* (08.02.2011): “El acuerdo social recibe el visto bueno del PSOE y CiU y el recelo del PP”; http://www.elpais.com/articulo/espana/acuerdo/social/recibe/visto/bueno/PSOE/CiU/recelo/PP/elpepuesp/20110208elpepunac_1/Tes
- El País* (08.03.2011): “El PP registra en el Parlament catalán el polémico contrato de integración de inmigrantes”; http://www.elpais.com/articulo/espana/PP/registra/Parlament/catalan/polemico/contrato/integracion/inmigrantes/elpepuesp/20110308elpepunac_37/Tes.
- FAES (2011): *Propuestas para una estrategia energética nacional*, http://prensa.fundacionfaes.org/2011/01/INFORME_FAES_ENERGIA.pdf
- Financial Times* (06.02.2011): Cameron’s costly migration policy, <http://www.ft.com/cms/s/0/d4f4a6a6-322a-11e0-a820-00144feabdc0.html#axzz1HLZ0eBdp>
- Fundación IDEAS (2009): *Un nuevo modelo energético para España*; http://www.fundacionideas.es/sites/default/files/pdf/Informe_Modelo_Energetico.pdf
- Fundación IDEAS (2010): *Ideas para una nueva economía: hacia una España más sostenible en 2025*. http://www.fundacionideas.es/sites/default/files/pdf/Ideas_para_una_nueva_economia.pdf
- G-20 (2008): *Declaration, Summit on Financial Markets and the World Economy*, November 15, 2008, http://www.g20.org/Documents/g20_summit_declaration.pdf
- G-20 (2009): *The Global Plan for Recovery and Reform*, 2 April 2009, <http://www.g20.org/Documents/final-communique.pdf>
- IFS (Institute for Fiscal Studies) (2010): *Reviewing the Spending Review*, London.
- La Cerca* (19.03.2010): Mariano Rajoy: “La Ley de Economía Sostenible no es ni buena ni mala, es indiferente”; http://www.lacerca.com/noticias/espana/ley_buena_mala_indiferente-57692-1.html
- Libertad digital* (21.07.2008): “Rajoy arremete contra la política económica de Zapatero y le pide que cese a Solbes”; <http://www.libertaddigital.com/economia/rajoy-arremete-contra-la-politica-economica-de-zapatero-y-le-pide-que-cese-a-solbes-1276335168/>

MARM (2010): Inventario de gases de efecto invernadero de España; http://www.marm.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Sumario_inventario_GEI_Espania_-_Serie_1990-2009_v_2_tcm7-1741.pdf

Mulas-Granados, C. (2006): *Economics, politics and budgets. The political economy of fiscal adjustments in the EU*. London: Palgrave MacMillan.

Mulas-Granados, C. y de Paz Nieves, C. (pendiente de publicar): Ajustes fiscales progresistas. Fundación IDEAS.

PP (2008a): Intervención Presidente del PP, Mariano Rajoy, Foro ABC, 24 de junio 2008; http://estaticos.elmundo.es/documentos/2008/06/24/discurso_rajoy.pdf

PP (2008b): Posición del Partido Popular sobre la cumbre de Washington del 15 de noviembre de 2008; http://www.libertaddigital.com/fotos/noticias/Posicion_del_PP_sobre_la_Cumbre_de_Washington.pdf

PP (18.10.2009): “Zapatero debería dejar de actuar con la soberbia de los últimos tiempos y escuchar a la gente”; http://www.pp.es/actualidad-noticia/zapatero-deberia-dejar-actuar-soberbia-ultimos-tiempos-escuchar-gente_1418.html

PP (2009), *Alternativas frente a la crisis*; http://www.pp.es/actualidad-noticia/pp-no-va-alcanzar-un-acuerdo-un-Gobierno-que-suba-impuestos_2195.html

PP (2010): *Alternativas frente a la crisis*; http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201003/03/espana/20100303elpepunac_1_Pes_PDF.doc

PP (2011): *Más sociedad, mejor Gobierno. Compromiso 2011-2015*; <http://www.pp.es/actualidad-noticia-detalle.php?codigo=4344>

Público (22.10.2007): “El PP cree que subir el salario mínimo provocará desempleo”; <http://www.publico.es/espana/9101/el-pp-cree-que-subir-el-salario-minimo-provocara-desempleo/version-imprimible>.

The Guardian, (06.06.2010): “David Cameron: cuts ‘will change British life’”; <http://www.guardian.co.uk/politics/2010/jun/06/david-cameron-spending-cuts>

Fecha de acceso a todas las páginas web citadas: febrero de 2011.

Documentos de debate publicados

- 1/2009. Una propuesta para la elección del Gobierno Europeo. Antonio Estella
- 2/2009. Inclusión y diversidad: ¿repensar la democracia? Wolfgang Merkel
- 3/2009. El Estado Dinamizador antes y después de la crisis económica.
Carlos Mulas-Granados
- 4/2009. Programa para una política progresista: nota para el debate. Philip Pettit
- 5/2009. Liderando la Tercera Revolución Industrial y una nueva visión social para el mundo.
Jeremy Rifkin
- 6/2009. Prioridades económicas de Europa, 2010-2015. André Sapir
- 7/2009. La crisis económica global: temas para la agenda del G-20. Joseph E. Stiglitz
- 8/2009. Global Progress: un paso decisivo para establecer una agenda progresista internacional para el siglo XXI. Matt Browne, Carmen de Paz, Carlos Mulas-Granados
- 9/2009. An EU “Fit for Purpose” in the Global Era. Una UE adaptada a la nueva era global.
Loukas Tsoukalis, Olaf Cramme, Roger Liddle
- 10/2010. La estrategia 2020: del crecimiento y la competitividad a la prosperidad y la sostenibilidad. Antonio Estella y Maite de Sola
- 11/2010. La renovación liberal de la socialdemocracia. Daniel Innerarity
- 12/2010. La producción y el empleo en los sectores españoles durante los ciclos económicos recientes. Simón Sosvilla Rivero
- 13/2010. El modelo danés: un éxito en Europa. Mogens Lykketoft
- 14/2010. ¿Qué valor añade España a África subsahariana?: estrategia y presencia de España en la región. José Manuel Albares
- 15/2010. La Alianza de Civilizaciones: una agenda internacional innovadora. La dimensión local y su potencial en África. Juana López Pagán
- 16/2010. La crisis económica mundial en África subsahariana: consecuencias y opciones políticas para las fuerzas progresistas. Manuel de la Rocha Vázquez
- 17/2010. Microfinanzas, microcréditos y género en Senegal. Josefa Calero Serrano
- 18/2010. El debate sobre la Estrategia Española de Seguridad.
Antonio Estella, Aida Torres y Alicia Cebada
- 19/2010. Biocombustibles líquidos: situación actual y oportunidades de futuro para España.
Ricardo Guerrero, Gustavo Marrero, José M. Martínez-Duart y Luis A. Puch
- 20/2010. Conferencia African Progress. El papel y el futuro de las políticas progresistas en África subsahariana. Carmen de Paz y Guillermo Moreno
- 1/2011. Nuevas ideas para la regulación del sistema financiero internacional.
Rafael Fernández y Antonio Estella

Documentos de trabajo publicados

- 1/2009. ¿Cómo votan los españoles en las elecciones europeas?
Antonio Estella y Ksenija Pavlovic
- 2/2009. ¿Por qué es necesario limitar las retribuciones de los ejecutivos? Recomendaciones para el caso de España. Carlos Mulas-Granados y Gustavo Nombela
- 3/2009. El Tratado de Lisboa. Valores progresistas, gobernanza económica y presidencia española de la Unión Europea. Daniel Sarmiento
- 4/2010. Por la diversidad, contra la discriminación. La igualdad de trato en España: hechos, garantías, perspectivas. Fernando Rey Martínez y David Giménez Glück (coordinadores)
- 5/2010. Los actuales retos y la nueva agenda de la socialdemocracia. Ludolfo Paramio, Irene Ramos Vielba, José Andrés Torres Mora e Ignacio Urquizu
- 6/2010. Participación ciudadana en el ámbito municipal. Reflexiones teórico-empíricas y prácticas participativas. Eva Campos
- 7/2010. La nueva agenda social: reforma de las políticas activas de empleo. Asunción Candela, Carlos Mulas-Granados y Gustavo Nombela
- 8/2010. Ideas para la creación de “ATILA” (Área Trasatlántica de Integración para la Libertad Ampliada). Antonio Estella, Alicia Cebada y Claudia Martínez
- 1/2011. Mujer y economía sostenible: balance y perspectivas. Reyes Maroto, Asunción Candela y Carlos Mulas-Granados

Informes publicados

Nuevas ideas para mejorar el funcionamiento de los mercados financieros y la economía mundial.

Decálogo de reformas para responder a una crisis sistémica.
(Diciembre de 2008)

La producción de los pequeños agricultores y la reducción de la pobreza.

Principios para un mecanismo de coordinación financiera (MCF)
de apoyo a los pequeños agricultores.
(Enero de 2009)

Un nuevo modelo energético para España.

Recomendaciones para un futuro sostenible.
(Mayo de 2009)

Ideas para una nueva economía.

Hacia una España más sostenible en 2025.
(Enero de 2010)

Impuestos para frenar la especulación.

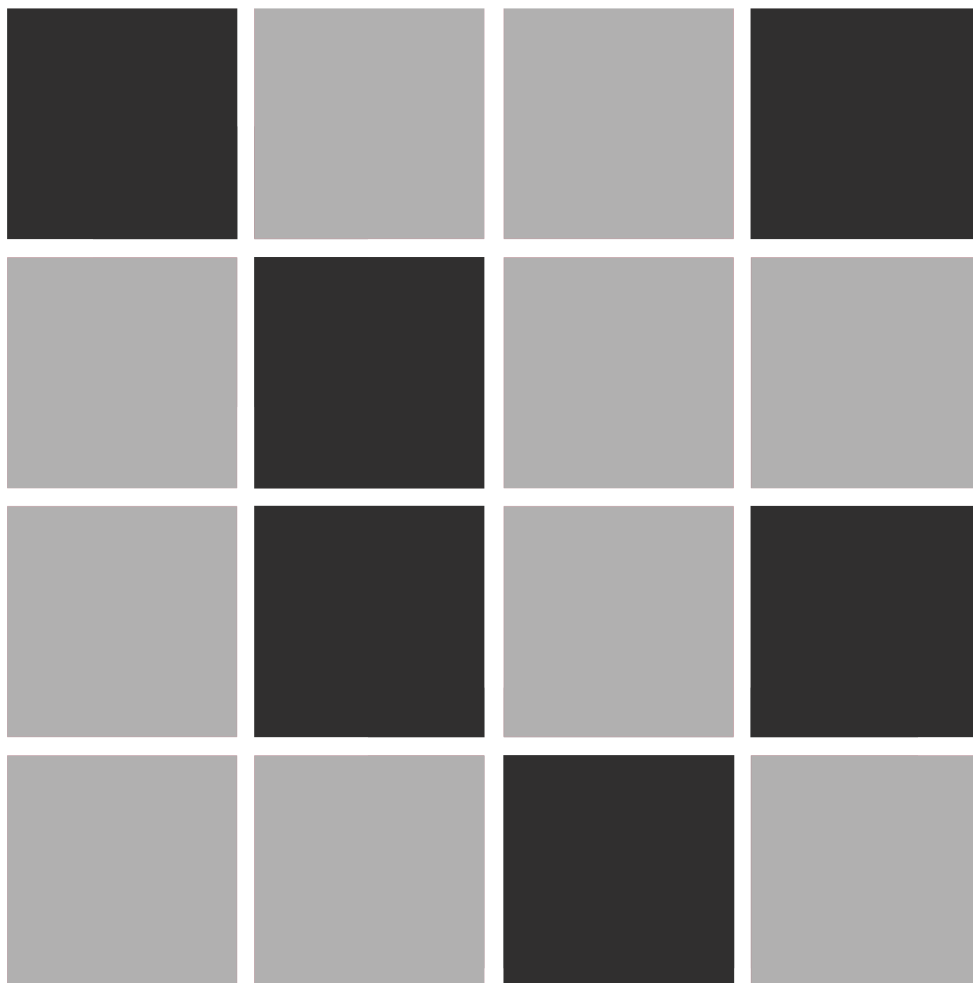
Propuestas para el G-20.
(Mayo de 2010)

La reforma de las pensiones.

¿Cómo va a beneficiar a la sociedad española?
(Febrero de 2011)

Los empleos verdes en la Comunidad de Madrid.

Posibilidades de futuro.
(Marzo de 2011)



Calle Gobelás, 31 - Madrid 28023

Tel. (0034) 91 582 00 91 - Fax. (0034) 91 582 00 90

info@fundacionideas.es • www.fundacionideas.es